



El Militante



CORRIENTE MARXISTA REVOLUCIONARIA

Precio: 1,50 euros
Ayuda: 2,00 euros

Núm. 246 • FEBRERO • 2011

Organizar la izquierda de CCOO y UGT en defensa de un sindicalismo combativo, de clase y democrático



EDITORIAL ▶ contraportada y pág. 2 | Balance de la huelga general del 27 de enero en Euskal Herria y Galicia ▶ pág. 18 y 19

Las direcciones de CCOO y UGT avalan los ataques del gobierno y la patronal



páginas centrales

Revolución en el mundo árabe

También en este número



- Irlanda del Norte, ¿se ha solucionado el conflicto? ▶ pág. 3
- Zapatero y los 37 ladrones ▶ pág. 7
- La 'Ley Sinde' no nace por amor al arte ▶ pág. 8
- Los Pactos de la Moncloa, ni positivos ayer ni un "modelo" para hoy ▶ pág. 9
- El gran negocio del tabaco ▶ pág. 12

Contrarreforma de las pensiones: las direcciones de CCOO y UGT avalan los ataques del gobierno y la patronal

Organizar la izquierda de CCOO y UGT en defensa de un sindicalismo combativo, de clase y democrático

VIENE DE LA CONTRAPORTADA

Los argumentos esgrimidos por las cúpulas de CCOO y UGT para respaldar una agresión de tal envergadura, se basan en que, a pesar de aceptar recortes evidentes, se garantiza el sistema público de pensiones. Pero este razonamiento se cae atendiendo a las propias cifras del gobierno. En primer lugar, la Seguridad Social dispone de un superávit de 64.000 millones de euros en el Fondo de Reserva. Si la recesión se prolonga por más tiempo, como efectivamente es la perspectiva, el superávit se puede recortar. Pero la pregunta en esas circunstancias es muy sencilla: ¿De dónde sacar los recursos para garantizar unas pensiones dignas? Si los dirigentes de UGT y CCOO fueran consecuentes con sus discursos solemnes contra el neoliberalismo, la respuesta no ofrecería ninguna duda. Los recursos existen y deberían salir de una política impositiva equitativa, que gravase los fabulosos beneficios que obtiene la banca privada, y en el caso de que esta se negase, de la nacionalización completa de todo el sector financiero, para poner los medios que genera la clase obrera con su plusvalía, al servicio de las necesidades de la sociedad.

Obviamente una alternativa de este tipo supone cuestionar los fundamentos del capitalismo. Pero como la experiencia está demostrando, no se puede estar en misa y repicando a la vez. O con los capitalistas o con los trabajadores. Argumentar que los recortes son el camino para sostener el sistema de pensiones es una falacia de tomo y lomo y sólo sirve para reforzar ideológicamente los argumentos de los auténticos responsables de la crisis: la gran banca y los grandes empresarios, que además son los únicos beneficiarios de las medidas adoptadas por el gobierno. Pero también es una prueba de la bancarrota más completa que se justifique este acuerdo en aras de crear un clima de paz social y sosiego, de confianza en el “futuro de la economía española”, el mismo día que se anuncia que la cifra de parados subió en 370.100 personas en 2010 respecto a 2009, un 8,5%, situándose el número total de desempleados en 4.696.600 personas y la tasa de paro en el 20,33%.

El acuerdo prepara el camino para nuevos ataques

La idea de que este acuerdo servirá para evitar nuevos ataques es una quimera sin sentido. Cuando la tinta de la firma aún no se había secado, el Secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, declaró en una reunión convocada con los grandes capitalistas y banqueros de la *city* londinense que “el proceso para recuperar la credibilidad [de la economía española] será tan duro como requiera la situación”. Este sujeto es el mismo que ha defendido activamente la urgencia de reformar el sistema de financiación de la sanidad pública abriendo las puertas al copago. Por si no fuera suficiente, un día después de la firma, Angela Merkel visitó al Presidente Zapatero y afirmó diplomáticamente que el acuerdo está muy bien, sobre todo por contar con la rúbrica sindical, pero que en cualquier caso serían necesarias nuevas medidas de ajuste, entre ellas, eliminar la vinculación del aumento de los salarios al crecimiento de la inflación.

Atendiendo a la profundidad de la recesión económica, las presiones a favor de más medidas contra la clase obrera y más ajustes se van a endurecer en los próximos



meses. La campaña ya la ha iniciado el gobernador del Banco de España, que ha manifestado su completo acuerdo con las medidas de Merkel y, aunque Zapatero se mostró ambiguo en el caso de desvincular salarios de la inflación, ha declarado su apoyo incondicional al programa de “competitividad” planteado por la presidenta del gobierno alemán. En resumen, como señaló el diario económico *Cinco Días* en su edición del pasado 29 de enero: “No se debe parar aquí. La energía, la justicia, la determinación de los salarios, los ajustes en las causas de los despidos, el control de las finanzas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, etc., son materias que no pueden demorarse mucho más tiempo”.

Los dirigentes de CCOO y UGT, junto al gobierno, han pretendido otorgar una trascendencia histórica al acuerdo, comparándolo con los Pactos de la Moncloa. Pero la realidad dista mucho de ser semejante. Los Pactos de la Moncloa sirvieron para descarrilar una situación prerrevolucionaria que se le escapaba de las manos a la burguesía, pero en aquel entonces la autoridad de los dirigentes de CCOO y UGT, del PCE y del PSOE, era incomparablemente superior a la que ahora tienen. La amenaza política que en aquel momento se esgrimió convenció, no sin oposición, a una parte considerable de la clase obrera de que esos pactos facilitarían la “transición a la democracia” y neutralizaría a los sectores golpistas del ejército franquista. La valoración que la población tiene del acuerdo firmado el 2 de febrero da una medida del grado del descrédito de los dirigentes sindicales y del gobierno, y del rechazo que suscita. Y lo que decimos no es gratuito, ha sido el diario *El País*, firme defensor del pacto, el que lo ha puesto en evidencia en una encuesta publicada el 6 de febrero: “Según un sondeo de Metroscopia para *El País*, el 51% considera que el pacto es una mala noticia. Incluso, una mayoría de votantes del PSOE ve de forma negativa la firma del acuerdo. La más rechazada es la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años, que es vista de forma negativa por hasta el 76% de los españoles. Y el 70% está en contra de que para jubilarse a los 65 años sea preciso haber cotizado 38 años y medio (...) Incluso, hay una crítica expresa a la actuación de todas las partes

que han participado en el acuerdo social. La actuación de los sindicatos es puntuada con un 3,8 (en una escala de 0 a 10), la del PP con un 3,8, la del Gobierno con un 3,9 y la de la patronal con un 4,2”.

Organizar una izquierda fuerte en CCOO y UGT para continuar la lucha

El acuerdo será sometido a discusión en el Parlamento. Como no podía ser de otra manera, la derecha apoyará su contenido a pesar de las demagógicas declaraciones del PP, que votará presumiblemente a favor presionado por sus amos de clase, pero no cesará en su campaña de desgaste contra el gobierno. Además, la posición electoral del PP se fortalece después del pacto, como la encuesta de *El País* también refleja, aumentando su ventaja en intención de voto en 15 puntos respecto al PSOE.

La única voz en el Parlamento que se ha levantado contra el pacto ha sido la de Izquierda Unida. En la reunión del Consejo Político Federal reunido el sábado 5 de febrero, Cayo Lara hizo un “llamamiento solemne a toda la ciudadanía de izquierdas, parados, trabajadores, sindicalistas, autónomos y fuerzas de la Cultura para construir la alternativa de izquierdas ante la sumisión de Zapatero al poder financiero y la traición a su base social que le llevó a Moncloa” pero, al mismo tiempo, se negó a criticar la actuación de los dirigentes sindicales.

Evidentemente es muy positivo que IU se oponga a este pacto, pero para cualquier trabajador es obvio que nunca se hubiera firmado si no hubiera sido por el apoyo de las cúpulas de CCOO y UGT, que han cedido a todas las pretensiones del gobierno y la patronal sin lucha. Orillar diplomáticamente este hecho, para no enemistarse con las direcciones de CCOO y UGT, es la peor forma de construir una alternativa de izquierdas. Cayo Lara y la dirección de Izquierda Unida tiene una gran oportunidad: no sólo se trata de obtener buenos resultados electorales, sino de levantar una organización capaz de intervenir efectivamente en la lucha de clases, elevar el nivel de conciencia y organización de los trabajadores y combatir, dentro de nuestros sindicatos de clase, a aquellos que los utilizan para avalar

las contrarreformas e imponer la desmovilización. Si IU adopta una estrategia consecuente y llama a la base sindical a dar esta pelea, se encontrará con la oposición de los aparatos, pero en cambio se granjearán el apoyo decidido de miles de activistas y delegados sindicales y de los sectores más conscientes de la clase trabajadora.

Los derechos de la clase obrera se han conquistado a través de enormes sacrificios, de una voluntad decidida. Esa es la experiencia del movimiento obrero y por supuesto esa es la historia de nuestros propios sindicatos, de CCOO y UGT, que se forjaron en un combate contra la patronal y la dictadura. La idea propagada por las cúpulas sindicales de que no se puede cambiar la situación actual es falsa de principio a fin. La disposición de los trabajadores a defender sus derechos y conquistas a través de la movilización está sobradamente probada. Lo vimos en la huelga general del pasado 29 de septiembre, lo hemos visto también en las huelgas generales organizadas en Galicia y Euskal Herria por la CIG, ELA y LAB el pasado 27 de enero. No, la responsabilidad de lo que está pasando en el Estado español no es de la clase obrera y de la juventud. Si la burguesía, la patronal y el gobierno puedan imponer estas medidas regresivas es por que la política de concesiones y de claudicaciones de las direcciones de CCOO y UGT lo está haciendo posible.

Todos los trabajadores conscientes, todos los sindicalistas, todos los delegados debemos oponernos con todas nuestras fuerzas a este acuerdo y organizar dentro de nuestros sindicatos, dentro de CCOO y UGT, una fuerte oposición sindical de izquierdas, que levante una alternativa basada en un sindicalismo combativo, de clase y democrático. Hay que impulsar en el seno de CCOO y UGT, en las fábricas y las empresas una amplia campaña por la continuidad de las movilizaciones y la convocatoria de una nueva huelga general que tenga como objetivo claro la retirada de todas las contrarreformas aprobadas. Organizando un fuerte movimiento de oposición desde abajo, desde los comités, desde los delegados sindicales, desde las secciones sindicales podremos dar la batalla en el seno de CCOO y UGT para cambiar este sindicalismo de paz social por el que necesita la clase obrera: un sindicalismo basado en la movilización, en la democracia de la base y en la defensa de un programa de clase que unifique a todos los trabajadores y vincule el rechazo a todas estas contrarreformas con la lucha por cambiar la sociedad, por el socialismo.

- No a la contrarreforma de las pensiones. Por la jubilación a los 60 años con el 100% del salario y contratos de relevo para los jóvenes parados.

- Plan urgente contra el paro y el deterioro de las prestaciones sociales: Subsidio de desempleo indefinido de 1.100 euros al mes; reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales sin reducción salarial.

- Nacionalización de todas las empresas en crisis bajo control obrero.

- Aumento drástico del gasto público en sanidad, educación y prestaciones sociales.

- Nacionalización de la banca sin indemnización y bajo control democrático de los trabajadores y sus organizaciones.

**¡Únete a la Corriente Marxista
EL MILITANTE para luchar por
este programa en el seno de
nuestros sindicatos de clase!**

Irlanda del Norte

¿Se ha solucionado el conflicto?

Los medios de comunicación de todo el mundo han insistido en los últimos años en que el conflicto norirlandés está resuelto, según su versión, con los Acuerdos de Viernes Santo (abril de 1998) se consiguió acabar con los ataques sectarios entre protestantes y católicos. Mientras tanto, para los dirigentes del Sinn Féin se lograron dos objetivos muy importantes con el proceso de paz irlandés: la liberación de los presos políticos republicanos y el derecho

de autodeterminación para Irlanda del Norte. Pasados unos años desde la firma de los Acuerdos, tanto el DUP, unionista, como el Sinn Féin, republicano, empezaron a defender la idea de que un gobierno de colaboración significaría una mejora importante para la economía norirlandesa. Esta campaña, efectivamente, desembocó en la formación de un gobierno de coalición en mayo de 2007. Podía parecer que todo iba sobre ruedas, pero la realidad es bien diferente.

Imanol Aranburu

Los ataques sectarios están en un nivel muy elevado en estos momentos y se producen prácticamente todas las semanas: ataques a coches y casas, palizas y tiros de castigo (sobre todo en las piernas), no son para nada casuales. A esto podríamos sumar la actividad creciente de los grupos republicanos (sobre todo el R.IRA) con controles de carretera, ejecución de narcotraficantes y criminales (cuatro en 2010) y ataques a la policía. Para el antiguo dirigente del IRA Provisional, Martin McGuinness, estos republicanos no son más que unos "adictos a los conflictos y neandertales". Pero estas palabras ocultan las causas de fondo de lo que está sucediendo. En febrero de 2010 los incidentes de Irlanda del Norte llegaron a un nivel de intensidad tal, que el ministro de Justicia de Irlanda del Sur, Dermot Ahern, reconoció que eran tan altos como en cualquier momento en los últimos 40 años. Los medios de comunicación están ocultando sistemáticamente esta realidad. Desde los Acuerdos de Viernes Santo los llamados "muros de la paz" que dividen los barrios católicos y protestantes también han aumentado en número y en altura.

Los 'logros' de los Acuerdos de Viernes Santo

Gracias a los Acuerdos los presos políticos pudieron salir a la calle, algo muy positivo, aunque también hay que recordar que salieron de la cárcel muchos paramilitares unionistas. Hace diez años se podía decir que ya no había presos políticos, pero ahora la situación es diferente, ya que hemos asistido a una nueva escalada de detenciones y empeoramiento de los derechos democráticos de los presos. El 4 de abril de 2010 en la cárcel de Maghaberry presos republicanos tomaron el comedor para protestar por la criminalización del gobierno de Stormont. Según estos presos "en los años pasados, nosotros, los presos republicanos en Maghaberry hemos experimentado una disminución continua de las condiciones y un aumento constante en las tácticas opresivas que se adoptan en contra nuestra, de nuestras familias y visitantes". La protesta terminó el 12 de agosto cuando los presos republicanos alcanzaron un acuerdo que recogía sus reivindicaciones fundamentales, como el fin del registro con desnudo integral y la libre asociación. Entre los presos políticos se destacan antiguos líderes del IRA Provisional como Michael McKevitt (encarcelado desde 2001 cumpliendo una sentencia de veinte años por dirigir una organización terrorista) y su esposa Bernadette Sands (hermana del héroe republicano y huelguista de hambre Bobby Sands).

Se suele decir que gracias a los Acuerdos de Vienes Santo se consiguió el derecho a la autodeterminación de Irlanda del Norte. Pero, en realidad, este derecho fue una imposición de los unionistas y lo utilizan para someter los seis condados del norte al Reino Unido, pues en un hipotético referéndum sólo votaría la población de Irlanda del Norte, donde son mayoría los protestantes, y no toda Irlanda.

La formación de un gobierno de colaboración con el DUP no sólo no acerca la in-



dependencia nacional de Irlanda sino que ha servido de coartada para que una parte considerable del movimiento republicano irlandés se implique en las medidas de ajuste, en los ataques a la clase obrera decididos en Dublín y en Londres. Hay que recordar que para la formación de este gobierno el Sinn Féin tuvo que aceptar sobre todo dos condiciones: la creación de una policía norirlandesa y seguir la política económica de la burguesía inglesa.

Gobierno del DUP y del Sinn Féin

Desde el principio, el compromiso del gobierno de Stormont con la agenda neoliberal significaba que, poco a poco, se reduciría el gasto público y se aceleraría la privatización de sectores económicos estratégicos. Así ha sido. La política de este gobierno es seguir los dictados de la burguesía inglesa, hasta el punto que los primeros presupuestos de este gobierno se hicieron en Londres y luego se aprobaron por unanimidad en el ejecutivo. Los dos principales partidos, el Sinn Féin y el DUP, fueron sus más fervorosos defensores. Gerry Adams afirmó que el presupuesto significaba la "igualdad" y que suponía un "avance significativo". Cómo no, las grandes empresas en Irlanda estaban encantadas con el presupuesto.

Después, el ejecutivo de Stormont, a través de su programa de gobierno 2008-2011 recortó 200.000 millones de euros en el gasto público. A principios del 2010 aprobó nuevos recortes de 420 millones de euros. Y el pasado 23 de diciembre, la asamblea de Stormont, con votos a favor del DUP y del Sinn Féin, aprobó por mayoría un plan de ajuste económico para reducir el gasto en 5.804 millones de euros. Tras la votación, el ministro principal de Irlanda del Norte y líder del DUP, Peter Robinson, calificó el plan como "un presupuesto de primera clase". "Este es el Ejecutivo de Irlanda del Norte haciendo la tarea para la cual fue elegido, tomando decisiones, sin importar cuán difíciles, en nombre del pue-

blo norirlandés", agregó. De otro lado, el viceprimer ministro, Martin McGuinness, del Sinn Féin, señaló que el gobierno norirlandés "estuvo a la altura de los desafíos". Tampoco Gerry Adams se quedó atrás en su felicitación de la Navidad: "hemos acordado en el Norte un presupuesto que tiene por objeto proteger los servicios públicos mientras se busca hacer crecer la economía". Lo que no dijo Gerry Adams es que el presupuesto acordado supone subidas de impuestos, despidos en el sector público y una reforma regresiva del Servicio de Salud Nacional. Al igual que defiende esto, una de las propuestas hechas por Gerry Adams el año pasado para salir de la crisis fue la de reducir el impuesto de sociedades hasta situarlo al nivel de Irlanda del Sur, al 12,5%.

Recrudescimiento de la represión policial

Por otro lado, la policía (PSNI) que aceptó la dirección del Sinn Féin para aparentemente cuidar mejor los barrios republicanos está revelando su verdadero papel como cuerpo armado de la burguesía. Desde su fundación el PSNI introdujo la detención por 28 días; las armas de electrochoque; el spray de gas CS; ha disparado balas de goma a civiles desarmados y ha acumulado más de 50.000 de estos proyectiles; ha modernizado su arsenal, que incluye fusiles de asalto automáticos y vehículos blindados; ha extendido la ya extensa red de cámaras de vigilancia exterior y otros mecanismos de control; ha suprimido frecuentemente el derecho a la legítima protesta política pacífica; y ha ignorado las resoluciones de la Corte Europea de Derechos Humanos, al continuar utilizando la "Sección 44" para "detenciones y allanamientos" ilegales. Sólo en el 2009, el PSNI llevó a cabo más de 20.000 "detenciones y allanamientos", casi exclusivamente contra republicanos. Mientras tanto, sigue trabajando codo a codo con los 5.000 soldados británicos que se mantienen en el Norte y con el MI5 (servicios

secretos británicos). Además, la "inteligencia de seguridad" en Irlanda del Norte sigue siendo responsabilidad del servicio de seguridad MI5 británico. Ahora, con un aumento del presupuesto, el MI5 llevará la maquinaria de guerra británica en Irlanda. El MI5 no es responsable ante el Consejo de Stormont para los asuntos relacionados con la seguridad, pero estará disponible para informar al mismo en secreto lo que considere "apropiado".

El PSNI está utilizando personas (que posteriormente lo confirmaron) para que hagan llamadas falsas, para así cortar carreteras, crear tensión en la población y practicar redadas. En este caso ya empiezan a alzarse voces dentro de sectores republicanos que acusan al PSNI de querer crear en la población continuas molestias para culpar de ello a los grupos armados y crear un clima de rechazo social. En las últimas semanas del 2010, el PSNI empezó a utilizar la táctica de provocar situaciones de disturbios (que han concluido con detenidos y heridos). Por ejemplo, cada vez que se afirmaba que había una alerta de seguridad en Newry (zona republicana), el PSNI lo utilizaba como una excusa para llegar por la fuerza a cerrar el área de Derrybeg, cortar las carreteras, hostigar a los jóvenes y causar situaciones de disturbios. Hay que recordar que el PSNI no está sólo persiguiendo y deteniendo a los republicanos que están en desacuerdo con el gobierno, también detuvo, por ejemplo, a ocho jóvenes estudiantes en una movilización que protestaba contra los planes de una tercera subida de tasas de matriculación universitarias en Belfast. ¿Qué se puede esperar de una policía de la cual sus miembros son elegidos por un consorcio de empresas privadas y que sigue siendo parte del aparato estatal británico?

Liberación nacional y social

Los dirigentes del Sinn Féin están cometiendo un gravísimo error. Están aplicando la misma política que todos los gobiernos procapitalistas, tomando medidas contra la clase trabajadora. Y a la vez, están cometiendo el error de presentar el conflicto norirlandés como algo resuelto.

Si la creación del Estado Irlandés del Sur en 1921 no supuso una independencia real (tal como se ha demostrado con la crisis irlandesa y su "rescate") se conseguirá todavía menos con la política aplicada hasta el momento por los dirigentes del Sinn Féin en Irlanda del Norte. Si quieren una Irlanda unida y libre deben romper inmediatamente con los unionistas, y movilizar a la población con un programa revolucionario que una la lucha por la liberación nacional con la lucha por el socialismo. Si no, la burguesía inglesa e irlandesa seguirá dominando Irlanda, del norte y del sur; la población continuará sufriendo la caída de sus niveles de vida en contraste con el enriquecimiento de una minoría, que aunque se envuelva en la bandera nacional de Irlanda comparte negocios e intereses con los británicos; y los enfrentamientos sectarios aumentarán sin control. Es necesario luchar contra la división sectaria de la clase obrera y la juventud. El enemigo de los trabajadores republicanos no es el trabajador protestante, y viceversa. Los enemigos de los trabajadores republicanos y protestantes son los capitalistas que, mientras negocian juntos, mantienen la división sectaria para sacar provecho.

La condición previa para conseguir la libertad de Irlanda es unir a la clase obrera en la lucha a través de métodos revolucionarios, esto es, regresando a las tradiciones y el programa de James Connolly, el programa de la república de los trabajadores. Y no sólo la unidad de los trabajadores que viven en Irlanda. La única manera de acabar con el dominio de los capitalistas ingleses es unirse en la lucha con los trabajadores escoceses, galeses y, como no, los ingleses. Sólo así se podrá acabar con el capitalismo en las dos islas.

Yoni Moreno

En Bolivia la última semana de 2010 estuvo marcada por las masivas movilizaciones contra la subida del 80% del precio de los carburantes. Estas movilizaciones han provocado la mayor respuesta social en cinco años de gobierno de Evo Morales. Las mismas pusieron de manifiesto la vigilancia revolucionaria de las masas, que se movilizaron a lo largo y ancho del país con cortes de carretera y marchas, contra un decreto que reflejaba la presión de las multinacionales sobre el gobierno de Evo Morales. El decreto DS 780 del 26 de diciembre, terminaba con el subsidio de cerca de 1.000 millones de dólares a los combustibles, que grava la deuda del estado boliviano.

Subiendo los precios, el gobierno pretendía terminar con el contrabando de combustible a los países limítrofes, donde los precios son dos o tres veces superiores al boliviano. Ese negocio fomenta la corrupción y asciende a un montante de más de 150 millones de dólares. Esta fue la justificación que el gobierno de Evo dio para promulgar el decreto.

Pero como certeramente comprendieron las masas, el decreto olía a un *paquetazo* contra el pueblo y era consecuencia del creciente sabotaje de las empresas multinacionales que aún están operando en suelo boliviano, y que pese a que no son poseedoras en su mayoría de los hidrocarburos (fruto de la nacionalización de 2006) han ido gradualmente reduciendo su producción, saboteando la economía, así como presionando al gobierno para que sean los trabajadores y el pueblo los que tengan que pagar la factura de la explotación gasífera del país. Todo ello, según García Linera, vicepresidente del gobierno, “con el fin de incentivar las inversiones dentro del país”, es decir, del capital privado. Pero también ha habido una presión de clase en el sentido contrario: tras cinco días de lucha que paralizó el país por parte de los trabajadores, Evo Morales tuvo que derogar la medida y rectificar.

Bolivia no es ajena a la volatilidad de la situación política internacional. Con la oposición de la derecha muy debilitada tras la derrota del golpe de la Media Luna en octubre de 2008 y la reelección de Evo en diciembre de 2009, con un 60% de los votos, la estabilidad del gobierno parecía garantizada. Sin embargo, la revolución es un terreno de arenas movedizas. El “gasolinazo”, como fue denominado popularmente, sacu-

Bolivia: el movimiento de masas para el ‘gasolinazo’



dió el país y pasó factura con sus efectos políticos: la popularidad de Evo se desplomó del 54% al 30%. Y no sólo tuvo efectos políticos, sino también económicos: disparar la tasa de inflación anual hasta 7,18%, superior al 4,5% proyectado por el gobierno.

Y el azúcar subió un 40%

El 31 de diciembre también entró en vigor el alza del precio del azúcar en un 40%. “El gobierno elevó el precio de 5,3 a 7,5 bolivianos el kilo y de 61 a 86,5 bolivianos la arroba con el fin de ‘nivelar’ el precio del endulzante con el del mercado internacional, y de esta manera combatir al ‘agio y la especulación’ (...) El objetivo es acercarnos al precio de mercado porque hay una gran diferencia entre el precio de mercado y el precio de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA)”, explicó la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales.

Según la ministra, el “azúcar barata” que comercializaba la EMAPA creó un “mercado negro” aprovechado principalmente por “revendedores e intermediarios inescrupulosos” que no sólo especulaban con el producto sino que incluso lo sacaban de contrabando. “Mientras más distancia haya entre los precios del mercado y de EMAPA más se estimula al mercado negro (...) No podíamos seguir en manos de los intermediarios y especuladores”, argumentó (“El

precio del azúcar subió un 40%”, publicado en *Bolpress*).

Como en el caso de los combustibles, son los trabajadores y campesinos, los sectores que apoyan al gobierno de Evo Morales, los que pagan los platos rotos del desorden económico propiciado por los especuladores y los empresarios. Mientras las palancas fundamentales de la economía no estén nacionalizadas y planificadas democráticamente, la anarquía capitalista seguirá en pie intentando derrumbar la revolución. La subida de precios es un reconocimiento tácito de que quien gobierna la economía no es el gobierno ni el pueblo, sino los especuladores y los capitalistas. Al mismo tiempo todas las medidas que, sin romper con el capitalismo, intentan contener el sabotaje empresarial y la anarquía en la producción se convierten en una traba al normal funcionamiento del capitalismo, con lo que la crisis y el sabotaje se recrudecen, en contra de las aspiraciones reformistas.

La quimera de la ‘burguesía patriótica socialista’

Recientemente Evo Morales hizo llamamientos “a todas las fuerzas políticas y sociales, a la burguesía ‘patriota’, a las iglesias católicas y evangélicas y a la sociedad civil del país para ‘acabar con las broncas’, privilegiar los intereses nacionales por encima de las demandas corporativas regionales y lo-

cales, y establecer un gran pacto nacional, una alianza productiva con la burguesía agroindustrial para garantizar la seguridad alimentaria nacional, y ‘abocarnos todos a pensar en los grandes proyectos de desarrollo industrial’ en los sectores de hidrocarburos, hidroelectricidad y litio”.

A todo un sector de la burocracia estatal, de los sectores reformistas, les gustaría llegar a un acuerdo con la derecha o al menos con un sector. De hecho, les gustaría trasladar los acuerdos económicos que ya tienen al terreno político. Buscan la quimera de un sector de la “burguesía patriótica socialista” que invierta y que ponga los intereses del país por encima de sus beneficios, que no se lucre tanto, etc... Algo que sólo existe en los sueños de los reformistas socialdemócratas y que sirve para adormecer políticamente a las masas trabajadoras.

Sin embargo, este intento de doblar la revolución hacia la derecha está sometido a presiones en el sentido contrario y puede ser derrotado. El carácter parasitario de los empresarios, la debilidad de la derecha y la profunda crisis del capitalismo internacional, que se suma a la presión y vigilancia de las masas sobre el gobierno que, como se ha puesto de manifiesto en el “gasolinazo”, no se dejan embaucar con cantos de sirena y son capaces de movilizarse en defensa de sus intereses.

Pero los trabajadores bolivianos y los sectores honestos del MAS deben ser conscientes de que la dinámica de las relaciones sociales de producción empuja, si no se toman las medidas necesarias expropiando a los capitalistas y extendiendo el control obrero de la producción, a la ligazón política entre la burocracia estatal, la burguesía y el imperialismo. Esa ligazón es el principal peligro para la revolución y lleva a la consolidación de una quinta columna derechista en el seno del movimiento revolucionario, como ocurre también en Venezuela. En la lucha entre esas dos tendencias, que es una lucha de fuerzas vivas, aún no resuelta, se dirime el futuro de la revolución boliviana. La última palabra la tiene la clase obrera organizada, la única capaz de ofrecer una salida revolucionaria y socialista al impasse en que se halla el gobierno.

Artículo completo en www.elmilitante.net

Santiago Freire

El viernes 21 de enero una manifestación de más de 20.000 personas, llegadas de todo el país, frente a la sede del gobierno albanés en Tirana, terminó en fuertes enfrentamientos con la policía, con el resultado de tres manifestantes muertos por disparos y varias decenas de heridos y detenidos. Esta movilización tuvo como causa de fondo el estado de inestabilidad que vive Albania desde junio de 2009, cuando las últimas elecciones parlamentarias dieron la victoria por un estrecho margen, y bajo fuertes acusaciones de fraude, al conservador Sali Berisha frente al opositor Edi Rama del partido socialdemócrata.

Berisha pudo mantener un frágil equilibrio en el gobierno gracias al apoyo de un pequeño partido, la Liga Socialista para la Integración, del viceprimer ministro Ilir Meta. Éste se vio obligado a dimitir a principios de año tras publicarse un vídeo, grabado con cámara oculta, donde se le ve tratando de manipular una licitación pública.

Estallido social en Albania

Ésta fue la chispa que hizo saltar por los aires, finalmente, la paciencia de los albaneses. Una paciencia que viene poniéndose a prueba desde muchos años atrás.

Albania, el país más pobre de Europa, sufre un cóctel que mezcla corrupción, crimen organizado y un masivo empobrecimiento de su población, factores que son el origen del estallido que se ha vivido estos días.

Los efectos de la crisis griega

Desde la caída del estalinismo en 1991 miles de trabajadores albaneses han buscado un futuro mejor en Grecia. Los permisos oficiales del gobierno heleno señalan una cifra aproximada de 400.000, pero ese número puede quedarse muy corto si se añade el número de inmigrantes ilegales no contabilizados. Radicados fundamentalmente en el sector de la construcción, el primer punto de inflexión hacia abajo del sector fue el final de las obras para las olimpiadas de Atenas en 2004, que sumió ya a muchos

de ellos en el paro. La situación se ha agravado rápidamente como consecuencia de la brutal crisis económica que asola a Grecia, disminuyendo de forma sistemática las divisas que los trabajadores albaneses pueden enviar a su país, así como las inversiones que los capitalistas griegos realizan en Albania. Todo ello ha contribuido a aumentar mucho más la situación de miseria de la población albana.

Capitalismo, nada que ofrecer

El ejemplo del pueblo tunecino ha mostrado como la movilización de los trabajadores, los estudiantes y las clases más desfavorecidas pueden derribar hasta al régimen más tiránico. Esto también ha tenido su influjo en Albania, incluso miembros del propio gobierno han acusado a los manifestantes de querer dar un “golpe de estado similar al de Túnez”. También, en la actuación de la autoproclamada “comunidad internacional” hay similitudes con los sucesos de

Túnez. Las potencias imperialistas no dudan en apoyar a estos gobiernos tiránicos y corruptos siempre que los mismos estén dispuestos a plegarse a sus intereses. Sólo el terror que les infunden las masas en movimiento hace que empiecen a soltar lágrimas de cocodrilo y a hablar de paz, libertad y comisiones de investigación. Cuán diferente es la actitud de “los campeones de la democracia” con Cuba y Venezuela hacia donde siempre están preparados a lanzar todo su veneno criminal a las primeras de cambio.

Los medios burgueses buscan ahora convencernos que es el “huevo” de la corrupción y la tiranía el que produce la “gallina” del fracaso del capitalismo. Pero el orden de factores es el contrario y sí altera el producto. Pues es un capitalismo senil y decadente, que ya no tiene nada que ofrecer a las clases oprimidas, el que permite y necesita para su propia supervivencia de la existencia de los Berisha, Ben Alí y demás alumnos destacados del FMI y el Banco Mundial.

¿Qué intereses hay detrás del referéndum de independencia en el sur de Sudán?

Ana Sanjuán

Grandes reservas de petróleo

El continente africano ha sido y es escenario de las luchas e intrigas de las grandes potencias imperialistas dispuestas a sacar el máximo beneficio de los inmensos recursos naturales del suelo africano. En Sudán el imperialismo británico aplicó la política de "divide y vencerás" concentrando a la mayoría de la población musulmana y de habla árabe en el norte, y el resto, principalmente cristianos y animistas, en el sur. En 1956 Sudán consiguió la independencia, pero el imperialismo dejó sembrada la semilla de multitud de divisiones étnicas, religiosas, regionales y tribales que fueron el origen de posteriores conflictos armados. Durante 22 años sufrió una cruenta guerra civil, en la que murieron dos millones de personas y provocó cuatro millones de refugiados. Terminó en 2005 con un Acuerdo de Paz entre el gobierno de Sudán, encabezado por el actual presidente, el reaccionario Omar Hassan al-Bashir, y el Movimiento de Liberación Popular de Sudán (SPLM principal grupo político del sur), dirigido por el actual vicepresidente de Sudán y presidente del gobierno del sur, Salva Kiir. El acuerdo, entre otros puntos, recogía la celebración del referéndum de independencia.

Sudán es un país potencialmente rico y en cambio es uno de los más pobres del mundo. En el índice de pobreza de la ONU ocupa el puesto 104 de un total de 132 países y la esperanza de vida no supera los 50 años de edad. Sudán tiene unas reservas petroleras de 6.700 millones de barriles, el 80% en el sur del país. Eso significa que la mayor parte de la riqueza petrolera pertenecerá al nuevo estado.

El petróleo hasta ahora ha sido la principal fuente de ingresos del gobierno sudanés, entre 1998 y 2008 estos ingresos quintuplicaron el crecimiento económico del país. Pero estos beneficios, como en la inmensa mayoría de países del llamado Tercer Mundo, sólo ha enriquecido a una ínfima minoría privilegiada, mientras la inmensa mayoría de la población vive en la pobreza. Recientemente los documentos de Wikileaks revelaban como al-Bashir había sacado del país 9.000 millones de dólares, que se encuentran en bancos británicos, equivalente a una décima parte de la renta nacional del país. El enriquecimiento de una pequeña élite del norte, la discriminación social y económica del sur (la tasa de pobreza en el sur es del 85%, frente al 46% del norte), junto a la opresión nacional y la represión que du-

rante décadas ha sufrido la población del sur a manos del reaccionario régimen de al-Bashir, ha provocado un enorme resentimiento en el sur, esa es una de las razones de del masivo apoyo a la independencia, según la Comisión para el Referéndum el 98% habría apoyado la partición del país.

¿Un paso hacia la 'democracia y la justicia'?

Los imperialistas, sobre todo los gobiernos de EEUU y la UE, han apoyado entusiastamente el referéndum de independencia. Obama en *The New York Times* llegó a definirlo así: "un voto histórico por la autodeterminación (...) que provocará júbilo e inspirará un paso adelante en el largo camino de África hacia la democracia y la justicia". Pero lo que verdaderamente está detrás del apoyo norteamericano a la independencia del sur está el conseguir una ventaja estratégica con relación a China, que controla el 60% de la producción petrolera sudanesa. Si se crea un nuevo estado, esos contratos dejan de tener validez, se tendrían que renegociar y por tanto las petroleras europeas y norteamericanas tendrían su oportunidad.

Aunque no es oficial el resultado, el gobierno sudanés ha dicho que lo acepta.

El nuevo estado nacería como uno de los países más pobres del mundo y el nuevo gobierno seguiría siendo un gobierno capitalista al servicio del imperialismo. Desde la celebración del referéndum (9 de enero) ya ha habido más de treinta muertos en enfrentamientos fronterizos, así que sólo es cuestión de tiempo el resurgir del conflicto armado. El levantamiento de la nueva frontera y el reparto de los recursos petrolíferos limítrofes ya está siendo objeto de tensiones. También está por resolver el destino de una región fronteriza con etnias enfrentadas, Abyei, que tiene que celebrar su propio referéndum. Por otro lado, 140.000 ciudadanos del sur que viven en el norte del país ya están huyendo por temor a represalias como consecuencia de la independencia. La separación del sur y la creación de un nuevo estado capitalista no es la solución a los problemas que sufren las masas sudanesas ni va a suponer el ejercicio efectivo del derecho a la autodeterminación de ningún pueblo. La única alternativa es la unidad de jóvenes, trabajadores y campesinos sudaneses para derrocar a sus respectivos gobiernos reaccionarios, y mediante su lucha liberarse del yugo del imperialismo, emprendiendo así la tarea de la transformación socialista de la sociedad.

Miriam Municio

Ofensiva patronal contra la clase obrera italiana

La CGIL tiene que dar un paso al frente y convocar una huelga general

En Italia se está gestando un ambiente de contestación social muy profundo, alimentado no sólo por los efectos generales de la crisis sino por el carácter particularmente reaccionario y corrupto del gobierno Berlusconi y la dura ofensiva de la patronal, que ha llegado al extremo de romper unilateralmente, en septiembre de 2010, el convenio colectivo del sector del Metal. El 16 de octubre, 500.000 trabajadores italianos inundaron las calles de Roma convocados por la Federación del Metal (FIOM) del principal sindical del país (CGIL) contra este atropello y los planes de ajuste.

Efervescencia social y oposición sindical en la CGIL

El enfrentamiento interno en la CGIL entre un sector que se aferra al sindicalismo de pactos y consensos con la burguesía (la nueva secretaria general de la CGIL, Susana Camuso, ha señalado que "una CGIL de oposición no es útil") y otro sector, aglutinado en torno a la FIOM, que se da cuenta de la necesidad de un giro a la izquierda, es una realidad. El 8 de noviembre su comité central aprobaba un documento en el que exigía a la CGIL salirse de la negociación con el gobierno y la patronal (está encima de la mesa un acuerdo sobre productividad que contempla contratos con periodos de prueba de un año, la posibilidad de eliminar los límites al encadenamiento de contratos temporales, y el aumento del 50% de lo que pagan los trabajadores a la seguridad social) y proponiendo la convocatoria de una huelga general, que podría desembocar en un movimiento que hiciera caer al gobierno. Para dar cauce de forma controlada a la presión que existe en sus bases, la CGIL convocó una nueva marcha a Roma el 27 de noviembre, que fue masiva.

Esta convocatoria coincidía con la entrada en escena de los estudiantes (contra los recortes en la educación pública y la "reforma Gelmini"), con un movimiento muy participativo, masivo y con una clara orientación hacia el movimiento obrero, y cuyo punto álgido se produjo el 30 de noviembre con más de 400.000 estudiantes en las ca-



lles. En este clima de contestación social, los trabajadores inmigrantes, también han salido a luchar. En la ciudad de Brescia, en octubre, se manifestaron exigiendo permisos de residencia, el fin de las agresiones racistas, respaldo legal a aquellos que denuncien a su patrón por no hacerles contrato, derecho de voto, etc. Allí y en Milán hubo manifestaciones de solidaridad por parte de los trabajadores italianos.

La efervescencia social ha continuado durante el mes de diciembre y a lo largo de 2011, con manifestaciones exigiendo la dimisión de Berlusconi por su implicación, entre otros, en casos de prostitución de menores, y una nueva convocatoria de huelga general del sector metalúrgico el 28 de enero por parte de la FIOM.

Huelga general del Metal y referéndum en Fiat - Mirafiori

El 23 de diciembre, FIAT de Mirafiori (Turín) firmaba un acuerdo con algunos sindicatos, rompiendo con el convenio nacional del metal, como ya hizo meses atrás en su planta de Pomigliano (Nápoles), y que se llevaría a referéndum el 13 y 14 de enero.

La FIOM se opuso radicalmente y convocó huelga general del sector, que a pesar del boicót y silencio informativo del que ha sido rodeada, tuvo un seguimiento cercano al 80%, según el sindicato, y decenas de miles de trabajadores salieron a la calle en 20 ciudades, exigiendo la convocatoria de una huelga general a la CGIL.

FIAT pretende una verdadera vuelta a las condiciones laborales del siglo diecinueve. La patronal y la burguesía italiana quieren evitar cualquier respuesta por parte de los trabajadores que le impida, en esta situación de crisis y competencia brutal por el mercado, mantener sus posiciones. Para ello, la existencia de sindicatos, en sí misma, es un obstáculo. Más, si alguno ha decidido dar la batalla.

Con el nuevo convenio de empresa en Mirafiori, que entrará en vigor en 2012, se amplía un turno más de trabajo semanal, habrá tres turnos diarios de ocho horas, y la posibilidad de dos turnos diarios de diez horas seis días a la semana. Extiende el número máximo de horas extras por trabajador de 40 a 120 horas anuales, se reduce de 40 a 30 minutos diarios las pausas por descanso, se podrá no pagar los primeros días de baja por

enfermedad en algunos casos. El trabajador no podrá hacer huelga contra lo firmado, a riesgo de ser sancionado e incluso despedido por infringir su contrato. Pero, aún hay más, los sindicatos que no hayan firmado (es decir, la FIOM, que es mayoritario en FIAT) no tendrán derecho a representación sindical. Si alguno de los sindicatos firmantes protestara contra el acuerdo, la empresa podría negarle el derecho de convocar asambleas de fábrica o no reconocer las horas sindicales de sus delegados.

A pesar de todas las dificultades que han soportado: chantaje patronal, si no se aprobaba el acuerdo se deslocalizaría la planta; una crisis económica golpeando duramente, sólo en Turín el año pasado crecieron los embargos de casas en un 54,8%; la posición pro patronal de la dirección del Partido Democrático, el candidato a alcalde de Turín por el PD y el actual alcalde de la ciudad, entre otros muchos miembros del partido han defendido el "sí" en Mirafiori; y el abandono por parte de la dirección de la CGIL, que con la boca pequeña ha apoyado el "No", pero que se ha negado, no una sino varias veces, a extender el conflicto del Metal convocando una huelga general, y que le exige a la FIOM aceptar el acuerdo para poder recuperar su representación... Insistimos, a pesar de todo esto, en el referéndum, donde participó el 96% de la plantilla (unos 5.500), los trabajadores dieron un ejemplo de dignidad. El "no" obtuvo el 45% de los votos, mientras que el "sí" obtuvo un 54%, (ganó por 400 votos y gracias al voto de oficinas, en parte jefes), ya que en la cadena de montaje los obreros dijeron mayoritariamente "no".

Estas condiciones laborales "esclavistas" abren la puerta a un mayor endurecimiento de la lucha de clases y un estallido social que ningún convenio de empresa podrá frenar.

Aniol Santo

El nuevo gobierno de Artur Mas ha tardado muy poco en poner de manifiesto sus verdaderos objetivos e intereses. Los llamamientos a la unidad nacional de los catalanes para salir de la crisis económica y “la humildad y vocación de servicio a Catalunya” de Artur Mas en campaña electoral, se han transformado rápidamente en el anuncio de un drástico plan de recortes sociales.

El gobierno de la patronal catalana

La composición del nuevo gobierno no da lugar a confusión. El nombramiento de los economistas burgueses Andreu Mas-Colell (Economía) y Xavier Mena (Empresa y Ocupación), ambos independientes, ha sido celebrada por la patronal catalana y las cámaras de comercio. Cuatro consejerías (Educación, Interior, Economía y Agricultura) serán dirigidas por ex consejeros de los gobiernos de Jordi Pujol, precisamente de la etapa de acuerdos con el PP en Madrid y Barcelona.

La nueva consejera de Enseñanza, Irene Rigau, ya fue consellera con Jordi Pujol y fue artífice del apoyo de CiU a la privatizadora Llei d'Educació de Catalunya (LEC). Se ha estrenado con el anuncio de más recortes presupuestarios (retraso del pago de las ayudas a comedores escolares, recorte de las ayudas a las actividades de la Semana Blanca, freno a la implantación de ordenadores en las aulas) y con el compromiso de impulsar la LEC con más conciertos económicos, incluyendo escuelas privadas que segregan a los alumnos por sexo.

Destaca el nombramiento como consejero de Sanidad de Boi Ruiz, hasta ahora máximo responsable de la patronal catalana de hospitales, acérrimo defensor del copago sanitario (que los pacientes paguen por recibir servicios sanitarios públicos), y firme opositor a la huelga que el colectivo de médicos protagonizó en 2006 por mejoras laborales. Los sindicatos de la salud han alertado de los peligros de privatización y el sindicato “Metges de Catalunya” lo define como el “hombre de la patronal”.

En el Departament d'Interior el nuevo conseller es Felip Puig, que se ha estrenado con la derogación del código ético de los Mossos d'Esquadra. Aunque dicho código,

El gobierno de CiU lanza una ofensiva contra los gastos sociales



impulsado por Joan Saura (ICV) en su etapa en Interior, no sirvió para acabar con los abusos policiales y torturas en las comisarías, el mensaje de CiU es claro: éste será un gobierno con mano dura contra la juventud, los inmigrantes y la clase obrera.

Plan de ajuste

Antes del primer mes en el gobierno, Artur Mas ha anunciado un plan de recortes sociales sin precedentes. El presupuesto de la Generalitat en 2011 disminuirá “como mínimo” un 10%, unos 3.000 millones de euros. Los recortes sociales se centrarán en sanidad, en torno a los 850 millones de euros, y en educación pública. Además de esto, se estudia la posibilidad de llevar a cabo operaciones financieras con edificios de la Generalitat (hospitales) para obtener liquidez, es decir, en la práctica se rehipotecarán edificios públicos.

La derecha ha acusado al tripartit de haber falseado las cuentas, y ha cifrado el déficit fiscal de la Generalitat en el 3'6% del PIB catalán, unos 7.800 millones de euros. Los 2.500-3.000 millones de euros recaudados con la emisión de los llamados *bonos*

patrióticos en octubre pasado, no han sido suficientes para hacer frente a los gastos corrientes de la Generalitat, y según afirma el nuevo gobierno, en caso de no emitir nuevos bonos de deuda pública (para lo que necesitan el permiso del gobierno central), en un par de meses no se podrá hacer frente al pago del salario de los funcionarios. De ahí la urgencia del plan de ajuste.

Esta urgencia por recortar los servicios públicos desaparece cuando el foco se sitúa en los beneficios empresariales. A la vez que exigen e imponen sacrificios a los trabajadores, han suprimido en su totalidad el Impuesto de Sucesiones, que tras su reforma en el año 2010, tan sólo afectaba al 6% más rico de la población, lo que supone dejar de ingresar 400 millones de euros, es decir, un nuevo regalo a los más ricos.

El nacionalismo de la burguesía catalana

Durante el último período el profundo descontento social entre amplias capas de la población, acentuado por la crisis económica y el desempleo masivo, se ha expresado en Catalunya tanto en el terreno de la lucha

de clases (la exitosa Huelga General del 29 de septiembre) como en defensa de los derechos democráticos nacionales (la masiva manifestación contra el recorte del Estatut), atizando en ambos casos el descrédito hacia la política oficial y la polarización política.

La burguesía catalana es totalmente consciente de este proceso, y está utilizando demagógicamente las legítimas aspiraciones de la población catalana a favor del derecho a decidir y contra las imposiciones antidemocráticas. Artur Mas y el mismísimo Jordi Pujol se han declarado recientemente favorables a la independencia de Catalunya (en un plazo indeterminado) con ocasión de la consulta sobre la independencia que se celebrará en Barcelona y otros municipios en abril de 2011.

La sentencia del Tribunal Supremo, imponiendo el castellano como idioma vehicular en la educación junto al catalán, rompiendo así uno de los elementos centrales de la política de inmersión lingüística, ha sido percibido (correctamente) como un ataque a la lengua catalana y como una nueva imposición del aparato del Estado, en la línea del recorte del Estatut por parte del Tribunal Constitucional. CiU utiliza ésta y otras imposiciones para presentarse como defensora de la lengua catalana, cuando en la práctica está recortando los cursos públicos gratuitos de catalán para trabajadores inmigrantes y son pioneros en la política de degradación y privatización de la educación pública, con sus evidentes consecuencias negativas en la inmersión lingüística.

Los drásticos recortes sociales que aplicarán los atribuyen al “expolio fiscal de España”. En realidad, cualquier competencia o transferencia que consiga Artur Mas del gobierno central, en ningún caso irá en beneficio de la mayoría de catalanes (invirtiendo en educación o sanidad pública) sino para beneficio de la burguesía catalana, como sucedió cuando Pujol apuntaló a los gobiernos de Felipe González y posteriormente de Jose María Aznar. Exactamente, el mismo papel quieren jugar ahora Duran i

Empresarios y altos cargos del gobierno asturiano imputados por corrupción

A finales de enero, saltaba la noticia en Asturias de la detención e ingreso en prisión del ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, de la ex directora de Planificación, Centros e Infraestructuras del Principado y de la funcionaria Marta Renedo Avilés, acusados de prevaricación,

cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude y blanqueo de capitales, todo ello relacionado con el cobro de comisiones ilegales en adjudicaciones irregulares. También están imputados los empresarios Víctor Manuel Muñiz, de la

compañía Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín, que han quedado en libertad con cargos, tras el pago de una fianza de 300.000 euros. Hay más empresas investigadas y se ha recogido documentación de varias consejerías, sin que hayan trascendido los detalles.

Mónica Iglesias

El presidente del Principado ha tardado varios días en reaccionar al escándalo, y sus únicas declaraciones han sido para apoyar al antiguo consejero de Educación. Por su parte, la Federación Socialista Asturiana ha querido desmarcarse de la acción de gobierno, y ha expulsado a Riopedre del PSOE, lo que ha provocado roces con el gobierno asturiano.

Aunque los hechos están bajo secreto de sumario, lo que se va conociendo apunta a un auténtico escenario de corrupción y robo de las finanzas públicas que emerge, además, cuando hace poco el gobierno asturiano del PSOE-IU aprobaba unos presupuestos que recortan los gastos prácticamente en todas las consejerías. Con el escándalo actual, resulta especialmente sangrante el recorte en educación, donde pese a haber este curso unos 1.700 alumnos

más, nos encontramos con 300 profesores menos. También ha sufrido recortes el tramo de educación infantil de 0 a 3 años, donde se eliminaron directores, y se han reducido drásticamente las ayudas para compra de libros. Todo en aras de “racionalizar el gasto”.

'Racionalizar el gasto' para optimizar sus beneficios

Ahora han trascendido algunas de las prácticas habituales en dicha consejería, avaladas por sus máximos responsables, en cuanto al suministro y equipamiento de los centros públicos. “... un colegio asturiano fue sometido hace pocos años a una reforma integral (...) Llegado el momento de contratar el equipamiento, el director contactó con la Dirección General de Centros y su responsable, M^a Jesús Otero, fue clara: ‘Ya pasan por ahí los de Almacenes Puma-

rín’. Cuando el comercial de Almacenes Pumarín pasó por el centro, (...) desechó de un plumazo la reutilización de todos los muebles que al equipo directivo le habían parecido que estaban en buen estado y podían ser reutilizados, incluidas algunas partidas que habían sido recibidas en el centro hacía apenas unos meses. ‘Hablé con la Consejería y les dije que no me parecía normal que pusieran a la zorra a cuidar del gallinero. Era lógico que el de la casa de suministros nos quisiera vender lo más posible pero me pareció demasiado’ cuenta el responsable de la escuela. Le dijeron que no se preocupara. Al final, el colegio se montó ‘a estrenar’ (...) El colectivo de directores de Gijón cuestionó en su día, la inversión que les llegó impuesta para cambiar todos los equipos informáticos de los centros. Muchos quisieron hacer valer que tenían equipos muy nuevos, e incluso recién instalados, que iban a la perfección. ‘No hubo

nada que hacer, los había que cambiar’” (*La Nueva España*, 26 de enero de 2011).

Curiosa manera de “racionalizar el gasto”. Imaginamos el cabreo que sentirán los funcionarios de a pie, a quienes se les ha descontado el 5% del salario “porque no hay dinero”.

Advertencias en la adjudicación de contratos y una polémica Ley de la Función Pública

Tras destaparse este caso, son muchas las voces que piden que se investiguen más consejerías y más adjudicaciones públicas. De hecho, Marta Renedo (que podría haber robado en torno a 1,5 millones de euros) llegó a la administración regional de la mano de Ana Rosa Migoya, la consejera de Administraciones Públicas, quien posteriormente la incorporó a su consejería como Jefa de Servicios Administrativos. La reacción del

Lleida y Artur Mas, tanto con el gobierno de Zapatero como con un futuro gobierno del PP.

La crisis del reformismo

Como analizamos en EL MILITANTE de noviembre y diciembre, la razón principal de la victoria de la derecha catalana ha sido la abstención masiva de jóvenes y trabajadores, y la crisis profunda del reformismo, que con su política le ha entregado el gobierno en bandeja. Ahora, para hacer frente a la política reaccionaria de CiU, el principal obstáculo con el que cuenta la clase trabajadora son sus propios dirigentes.

La derrota electoral ha venido seguida de la mayor crisis interna del PSC de su historia. La retirada de Montilla ha abierto la pugna entre el sector del aparato del partido, vinculado al poder municipal del área metropolitana, y el sector denominado "catalanista" del entorno de Maragall.

Es significativo que una de las figuras del sector "catalanista", Ferran Mascarell, el que fue Conseller de Cultura con el tripartit, no ha tardado ni un segundo en pasarse al gobierno de Artur Mas. Y el conseller de Economía del tripartit, Antoni Castells, que se negó a ir en las listas electorales y comparó al PSC "con el Titanic hundiéndose", aboga públicamente por la formación de un partido catalanista de izquierdas desvinculado del PSOE.

Ahora se van a celebrar elecciones primarias en el PSC para la candidatura a la alcaldía de Barcelona, que según las encuestas pueden perder tras treinta años de gobierno municipal, entre el actual alcalde Jordi Hereu y Montserrat Tura, consellera de Interior y Justicia en el tripartit. Y hasta el mes de octubre no se celebrará el congreso del PSC, así que la crisis interna se prolongará.

A pesar de todo, los dirigentes de ambos sectores, lejos de romper con la política de colaboración de clases que ha producido el desastre electoral, la están profundizando. La investidura de Artur Mas fue gracias a los votos del grupo parlamentario del PSC.

Los dirigentes sindicales de CCOO y UGT están aplicando en Catalunya la misma política sindical de desmovilización y pacto social que en el resto del Estado. Recibieron el nombramiento de los consellers de Economía y de Empresa y Ocupación, con una satisfacción sorprendente, asignándoles gratuitamente la etiqueta de "defensores del gasto público, de las políticas de salida de la crisis justa y equilibrada, basadas en el fomento del empleo y el diálogo social". No ha hecho falta ni un mes para desmentir tal disparate.

A pesar del freno de los dirigentes sindicales, la frustración social y rabia acumulada bajo la superficie no para de incrementarse. El desempleo siguió creciendo en el último trimestre de 2010, y el proceso de cierres de fábricas no se detiene. El último caso, el cierre de Yamaha en Palau-Solità i Plegamans (Vallés Occidental) con el despido de más de 400 trabajadores. Toda esta rabia está preparando un auge en la lucha de clases que, mientras más tiempo tarde en darse, mayor será en extensión y explosividad.

gobierno del Principado al conocerse la noticia ha sido la de echar balones fuera, insistiendo en que la investigación es fruto de una acción del propio gobierno que detectó las irregularidades de Marta Renedo, cesándola fulminantemente y poniendo todo en conocimiento de la justicia. Pero la realidad es que fue a través de Hacienda como se levantó la liebre, al investigar varias cuentas creadas por esta funcionaria.

Así las cosas, existe la sensación de que esto puede ser sólo la punta del iceberg. Desde la Sindicatura de Cuentas se ha señalado en varias ocasiones falta de objetividad y transparencia en contratos del Principado, y ha constatado "deficiencias" por arbitrariedad en la adjudicación de nuevos contratos del Hospital Central de Oviedo (HUCA), entre otros. Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló cuatro veces en un año y medio una convocatoria de puestos de altos funcionarios (los que intervienen en proyectos de adjudicación de obras públicas) por haber sido designados a dedo.

Jesús Iglesias, el coordinador general de IU de Asturias (con dos consejerías en el gobierno del Principado) ha manifestado que es necesario "evaluar" los mecanismos y filtros para "impedir que se puedan dar situaciones como estas". Sin embargo, recientemente han contribuido a la aprobación de la reforma de la Ley de la Función Pública que abunda en el método de la "dedocracia" y amplía los puestos que pueden designarse de esta manera. A nadie se le escapa que este proceder favorece como mínimo el enchufismo, la sumisión al consejero de turno y las corruptelas de toda clase.

Sin duda, este caso está muy lejos de cerrarse y no sería extraño que la trama alcanzara a más altos cargos del gobierno. La indignación que siempre suscitan casos de este tipo aumenta más aún cuando cada día se da una nueva vuelta de tuerca para echar todo el peso de la crisis sobre las espaldas de la mayoría de la sociedad, y pone de manifiesto la farsa de una democracia sobre la que no tenemos ningún tipo de control efectivo.



Zapatero y los 37 ladrones

El pasado 26 de noviembre Zapatero recibía a los principales 37 empresarios del país, unas semanas después de que se encontraran con el rey. Aunque supuestamente el objetivo de la reunión era analizar la situación de la economía, tuvo un claro carácter ejecutivo: el gobierno se comprometió a acelerar las "reformas" emprendidas (laboral, pensiones, cajas de ahorro...) co-

mo le exigían los empresarios ("que no le tiemble el pulso"). A cambio, los representantes de la burguesía española adquirieron un vago compromiso de "arrimar el hombro". Además, acordaron reunirse de nuevo en unos meses para "evaluar los avances", es decir, para examinar si el gobierno ha asimilado bien todo lo que tiene que hacer.

Óscar Egido

¿Quiénes son esos 37 empresarios que se reunieron con Zapatero? Básicamente las mayores empresas de la bolsa española más algunas que no cotizan (como El Corte Inglés, Mondragón, las mayores cajas y Mercadona, que no acudió). Si en los años 70 se hablaba de "las cien familias", recientemente el diario *Público* desvelaba que "un selecto grupo de veinte familias controla el 37,1% del Ibex (las 35 mayores empresas cotizadas), pese a que las acciones que poseen equivalen a un 12,2% del índice". A través de consejeros afines y participaciones cruzadas cada vez menos personas tienen más poder en las empresas. De hecho, si sólo hubieran estado los representantes de la Banca, el panorama habría cambiado bien poco: de las seis principales empresas cuatro son bancos o cajas y controlan las dos siguientes, Telefónica y Repsol. Como explicó Lenin, en la fase imperialista del capitalismo, la preponderancia de la burguesía financiera es absoluta.

Yendo al detalle, en la reunión había banqueros como Botín o Francisco González, que condujo la privatización de la banca pública para seguir al mando del BBVA. El Banco Popular, tradicional punto de apoyo del Opus Dei, o el Sabadell controlado por la burguesía catalana, también estaban. En cuanto a las Cajas, las dos mayores (La Caixa y Caja Madrid) hicieron valer su pretensión de convertirse en grandes grupos bancarios.

Después venían Telefónica, Repsol, Endesa o Gas Natural, antiguas empresas públicas construidas con impuestos y tarifas altas y entregadas al capital financiero para desgracia de sus trabajadores y de todos los consumidores. Últimamente también se dedican a saquear América Latina, y por supuesto, lo que hacía falta según ellos para salir de la crisis era subir la luz, el gas y la gasolina.

También asistió una nutrida representación de los constructores, seis en total. No cabe duda de que los Del Pino Calvo-Sotelo, Entrecanales, Villar Mir, Florentino Pérez, Koplowitz o Del Rivero son un ejemplo del emprendedor español, innova-

dor y desvinculado del ladrillo, así como del respeto de la normativa laboral a través de sus contrata y subcontratas en las obras. Como se va a recortar el gasto en obra pública, se están introduciendo en otros negocios como aeropuertos y servicios privatizados. Por supuesto, la privatización de AENA y la gestión privada de hospitales e infraestructuras les parecía absolutamente imprescindible para el "interés general". Abertis, la principal concesionaria de autopistas y beneficiaria de las ayudas públicas, también estuvo presente. Sus accionistas más destacados, La Caixa (por algo Catalunya es la comunidad con más peajes) y la familia March, descendientes del ilustre banquero que financió el golpe fascista de 1936.

Hablando de antecedentes ilustres, César Alierta, presidente de Telefónica vinculado al PP, es hijo del alcalde franquista de Zaragoza, y entre los Benjumea, tradicional familia de la burguesía sevillana y dueña de Abengoa, se cuentan varios ex ministros del dictador y numerosos títulos nobiliarios.

Un pequeño grupo de empresas de tecnología, como la citada Abengoa, Gamesa, Indra o Hispasat (las dos últimas también fueron públicas y se privatizaron), son el ejemplo perfecto del "nuevo modelo productivo" del que tanto se ha hablado últimamente. Es el sector público el que paga sus desarrollos e innovaciones además de los beneficios de sus accionistas, sea directamente a través de subvenciones o indirectamente con mayores tarifas eléctricas. El potencial de creación de empleo se revela con las fábricas de aerogeneradores cerradas últimamente para llevar la producción a China.

Los hoteleros Escarrer (Sol Meliá) y Riu se quejaron amargamente de lo abandonado que está el sector por el gobierno. Desde luego, sería conveniente que éste vigilara más de cerca las condiciones laborales y la represión sindical que impera en la hostelería. Y hablando de represión sindical, también estaba presente Isidoro Álvarez, presidente de El Corte Inglés, empresa pionera en la creación de sindicatos amarillos y el despido de trabajadores "rebeldes". Otro sector pionero en ataques contra los

trabajadores, que ha perfeccionado las tácticas de EREs, despidos y chantaje continuo es el del automóvil, que estaba representado por el presidente de su patronal, ANFAC.

La prensa destacó la ausencia de Roig, el presidente de Mercadona, y de la superestrella del empresariado español, Amancio Ortega, dueño de Zara, que dejó en manos de su consejero delegado acudir a la cita. Este tipo, ejemplo del "emprendedor", basó su fortuna en la hiperexplotación de las mujeres gallegas mediante el trabajo a domicilio o contrataciones de talleres masificados, jornadas de más de 12 horas y sueldos de miseria, ahora exporta su "modelo" a otros países y se nos presenta como paradigma de éxito. Otro que delegó en un ejecutivo fue Berlusconi, dueño de Telecinco. Tal vez estuviera ocupado en alguna de sus "fiestas" con menores de edad. Tampoco estuvieron personajes como "los Albertos", los March o Demetrio Carceller, clásicos en los consejos de administración de las grandes empresas pero que no controlan directamente ninguna.

¿Democracia? ¿Qué democracia?

Saltándose toda la escenografía del parlamentarismo y de las instituciones "democráticas", la oligarquía dictaba al gobierno las acciones a seguir. Paradojas de la democracia burguesa, es gracias a la fuerza de la clase obrera que el PSOE está en el gobierno. Asimismo, las fortunas de estos oligarcas parásitos, que ahora quieren haceros pagar la factura de su fiesta, proceden del trabajo no remunerado a la clase obrera, que es la única clase que genera riqueza. En la democracia burguesa, una ínfima minoría social, que no ha elegido nadie y que vive del trabajo ajeno, decide el destino de la mayoría; y los que verdaderamente trabajan y son la inmensa mayoría de la sociedad, no deciden nada. Habrá que invertir las cosas. La única democracia real y posible es aquella en que los medios de creación de riqueza y el poder estén en manos de la clase obrera. Sólo así la mayoría de la sociedad podrá realmente decidir sobre su futuro.

La 'Ley Sinde' no nace por amor al arte

Ana García

Tras el rechazo de la *Ley Sinde* en el Congreso de los Diputados hace algunas semanas, la polémica sobre la misma se reabre con más fuerza que nunca. Pero, en qué consiste realmente, a qué intereses responde y qué fines persigue son cuestiones importantes a responder para tener una posición clara al respecto.

La polémica ley ha sido presentada como una medida para luchar contra la piratería y así proteger los derechos de autor, pero lo que en realidad encierra es la defensa de los intereses de las grandes empresas productoras coartando así el acceso a la cultura para la mayor parte de la sociedad.

La ley establece que una Comisión de Cultura podrá "tomar medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información que vulnere derechos de propiedad intelectual o para retirar los contenidos (...) siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial". Así que cualquier web, tenga o no ánimo de lucro, será susceptible de ser cerrada ya que prácticamente todas utilizan contenidos (fotos, textos, enlaces) que potencialmente "vulneran" los derechos de propiedad intelectual.

En la primera propuesta de esta ley el cierre de las webs en ningún momento dependía de la actuación judicial, lo que desde el punto de vista de la legalidad burguesa constituía una completa aberración. Finalmente, los jueces participarán aunque sólo al final del proceso, para validar o no la decisión de cierre de webs tomada por dicha comisión. Esencialmente, ésta ha sido la modificación

realizada tras las negociaciones del PSOE con el PP y CIU para aprobar la ley en el senado. No obstante, el mayor o menor papel asignado al poder judicial no es el punto más importante ya que tradicionalmente tanto las leyes como la parte del aparato del Estado encargado de "interpretarlas" son instrumentos en manos de la burguesía para la defensa de su propiedad y de sus negocios, del tipo que sea. Precisamente es en esto en lo que se inspira el nacimiento de esta ley: la defensa del trozo de pastel que las multinacionales de la cultura, las grandes productoras, etc., no están dispuestas a negociar con nadie y que tratan de conservar con el hipócrita argumento de preservar la cultura.

Las grandes productoras y el verdadero negocio de los derechos de autor

Esa idílica imagen de amor por la cultura que tratan de proyectar las grandes productoras no puede ser más engañosa. Cuando explican que la piratería hace que las películas y discos originales no se vendan y que, por tanto, la supervivencia de músicos y cineastas esté en peligro, no hacen más que tratar de aprovecharse, por medio de la demagogia, del sentimiento general que la gente siente de respeto y aprecio a la cultura y sobre la necesidad de desarrollarla y preservarla todo lo posible.

Sin embargo, no se pueden identificar los intereses de las multinacionales con la supervivencia de la cultura. De hecho, lo que no explican es que muchos de esos músicos o artistas ni si quiera viven fundamentalmente gracias a esos CDs y DVDs originales (son las grandes productoras las que rentabilizan su producción y comercialización) sino a sus trabajos y actuaciones.

Quien realmente acaba con los derechos de los artistas es el monopolio de las productoras y distribuidoras que, además de dificultar enormemente el acceso de jóvenes artistas al sector, les obligan desde su posición de dominio a vender esos preciados derechos de autor con los que ellos se enriquecerán por los siglos de los siglos. Además, tratando de coartar la libre circulación de cultura en la red no hacen más que condenar a los autores a seguir siendo desconocidos si no aceptan pasar por las condiciones que estas grandes multinacionales les imponen.

Por si esto no fuera suficiente, todavía se escucha quien defiende la



idea de que estas multinacionales viven de vender discos y que no se les puede quitar su medio de vida, como si se tratase de una pequeña tienda de ultramarinos que se ve abocada al cierre. Pero es que estas grandes empresas se han enriquecido enormemente gracias a internet y a las descargas. Todos los DVDs y CDs vírgenes, las memorias USB de almacenamiento, los iPods, reproductores mp3, etc., que antes no existían han enriquecido a empresas multinacionales estrechamente vinculadas al negocio de la cultura. Y ellas no son las únicas que se han forrado con internet y las nuevas tecnologías, porque las compañías telefónicas también han hecho su agosto con la banda ancha.

La cultura no puede ser propiedad de una minoría

Lo que viene a revelar de forma muy clara todo este debate es que bajo el capitalismo la cultura es un negocio más, no tiene ningún carácter filantrópico. La imagen que desde los grandes medios de comunicación se vierte al respecto es una interesada campaña publicitaria que trata a los jóvenes y a los trabajadores con un enorme desprecio en lo que a cultura se refiere, tratándonos como gente inculta que no se interesa por la literatura, la música o el arte, para luego sacar provecho de nosotros con precios abusivos. Bajo este sistema el acceso a la cultura está restringido a una minoría, pero eso no es por falta de inquietudes al respecto sino porque cada vez que un joven quiere comprar un disco, ir a ver una obra de teatro o asistir a un concierto debe aceptar pagar precios que realmente privan a la mayor

parte de la sociedad de poder disfrutar de la cultura. Resulta verdaderamente irónico que cuando los avances tecnológicos permiten cosas tan asombrosas como Internet, una herramienta que permite el acceso masivo a la información y al conocimiento para millones de personas y que, sin duda, supone un avance sin precedentes para la humanidad, todas las alarmas salten para terminar con ello cuanto antes. Eso no es defender la cultura sino todo lo contrario. La cultura no puede ser un privilegio ni el negocio para enriquecer a unos pocos sino estar accesible y al servicio de la mayoría de la sociedad.

¿Defensa de los derechos de autor o ataque a los derechos democráticos?

Queda claro que la *Ley Sinde* no busca poner la cultura al servicio de la sociedad, pero esto no es lo único preocupante. Además existe otro punto muy grave: se abre la puerta legal para poder bloquear o cerrar webs de contenido político, social y reivindicativo, con la excusa de que sus contenidos vulneran los derechos de propiedad intelectual. Por tanto, la *Ley Sinde* es un mecanismo más en la progresiva asfixia de nuestros derechos democráticos que estamos soportando en los últimos años. No sería la primera vez que vemos cómo se utilizan herramientas de este tipo para utilizarse contra los activistas de izquierdas, de organizaciones anticapitalistas o sindicalistas destacados del movimiento obrero, cumpliendo así uno de los cometidos de los que "la ley" o "la justicia" están repletas: defender a la clase dominante por todos los medios.



Año nuevo, vida nueva

Daniel Reyes
Educador afiliado a CCOO

Esta vez el dicho se ha cumplido a rajatabla para muchos profesionales de los servicios sociales (trabajadores sociosanitarios y de la intervención social), ya que las uvas nos han traído el paro.

Nuestro sector, privatizado en gran parte, funciona a través de convenios que las comunidades autónomas y los ayuntamientos firman con las distintas ONGs (esas entrañables entidades sinónimo de lucro) que prestan sus servicios a cambio de la correspondiente subvención. Dichos convenios generalmente tienen carácter anual y cumplen a 31 de diciembre, fecha en la que se firman las renovaciones de los distintos proyectos y programas de atención social. En dichos convenios se especifican a través del pliego de condiciones los servicios que

se tienen que prestar, las condiciones mínimas que se tienen que garantizar y el número de trabajadores necesarios para desarrollar el proyecto.

Este año los recortes presupuestarios han llegado a estos convenios (aunque hace tiempo que se estaban llevando a cabo), por lo que prima la tendencia a rebajar las condiciones mínimas exigidas, incluyendo aumento de ratios con la correspondiente reducción de plantillas. Y debido a la privatización, dicha reducción de personal les está saliendo realmente barata ya que la mayoría de los trabajadores de lo social tenemos contratos a fin de obra vinculados con los convenios; nos vamos a la calle con una mano delante y otra detrás y sin posibilidad de defensa legal alguna. Y además, precisamente en un contexto donde el riesgo de exclusión social por los efectos de la crisis del capitalismo amenaza a millones de personas, los

sectores más vulnerables (ancianos, menores en desamparo, personas dependientes, discapacitados, etc.) van a sufrir el empeoramiento de la atención que reciben, ya de por sí muy deficiente. Feliz Año Nuevo.

Reconversión silenciosa

Esta reconversión del sector está pasando totalmente desapercibida, principalmente por dos motivos: la atomización y dispersión de los trabajadores del sector y la pasividad sindical. La sangría de puestos de trabajo (y por tanto de calidad de vida de los usuarios) se está produciendo sin grandes traumas (un educador menos en un centro de menores, dos auxiliares en un geriátrico, un trabajador social en un centro de día, se cierra un proyecto de intervención en calle que empleaba a tres técnicos, etc.), pero globalmente supone la pérdida de muchos puestos de trabajo y una degradación general de los servicios sociales. Mientras que para el poder sobramos educadores, trabajadores sociales o enfermeros, hemos bati-

do el récord histórico de número de agentes policiales en el Estado español, lo que deja muy claro el modelo social que están imponiendo (aunque a nadie debería extrañarle, con Rubalcaba manejando el cotarro).

Pero esta situación se puede revertir. Es cierto que la atomización y la precariedad del sector dificultan enormemente la lucha sindical, pero también es verdad que esto se debe a la falta de perspectiva del sindicalismo reformista, que tiende a aislar las luchas empresa a empresa sin ofrecer una alternativa real. Sin embargo, con un plan de lucha global y contundente, que tenga como objetivo último el desarrollo de unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad, otro gallo cantaría. Existen ejemplos de victorias obreras en luchas parciales al plantear el aspecto más global de la movilización, por ejemplo la paralización de la privatización de *El Hospitalito* (geriátrico público de Toledo), conseguida a finales del año pasado tras una dura lucha encabezada por el STAS Intersindical y que unió a trabajadores y usuarios. Éste es el camino.

Los Pactos de la Moncloa: ni positivos ayer, ni un 'modelo' para hoy

Antonio García Sinde

El 30 de enero, en la Convención Socialista de Zaragoza, el presidente Zapatero alabó el pacto de recorte de las pensiones firmado por el gobierno, los sindicatos y la CEOE, y señaló que se trataba del acuerdo social más importante desde los Pactos de la Moncloa.

Ya han pasado más de 33 años desde la firma de los Pactos de La Moncloa (27 de octubre de 1977), pero, pese al tiempo transcurrido y a las innegables diferencias entre la situación de aquellos años y la presente coyuntura, una revisión del contenido de aquellos pactos y, sobre todo, un balance de sus resultados, puede resultar clarificador para entender las consecuencias de la actual política claudicante de las direcciones sindicales.

¿Qué fueron los Pactos de La Moncloa?

Los años finales de la dictadura del general Franco coincidieron con el inicio de la primera crisis general del capitalismo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la crisis de 1973-1974. La muerte del dictador en 1975 abrió paso a una situación prerrevolucionaria, que se extendió a lo largo de 1976 y los primeros meses de 1977. Durante ese período, la conflictividad laboral alcanzó cotas extraordinarias, ya que los trabajadores estaban dispuestos a recuperar el terreno perdido durante los años de la dictadura. Más de 7,5 millones de trabajadores (casi el 90% de la fuerza laboral total) participaron en huelgas a lo largo de esos meses, huelgas que se iniciaban con un contenido meramente económico, pero que rápidamente se convertían en movimientos políticos que amenazaban con desbordar el orden establecido, como sucedió en Vitoria en Marzo de 1976. La burguesía se enfrentaba a ese reto lastrado por una doble debilidad. Por un lado, las bases económicas del capitalismo español eran sumamente débiles, consecuencia del fracaso histórico de la burguesía española para cumplir con sus tareas históricas liquidando las bases económicas y sociales del Antiguo Régimen; y, en segundo lugar, el aparato del estado que le había garantizado durante años, mediante la represión más cruel, la dominación sobre la clase trabajadora se desmoronaba poco a poco ante las acometidas de una clase obrera que había perdido el miedo.

El terror de la burguesía a un choque frontal con la clase trabajadora propició un rápido acercamiento entre los herederos del régimen de Franco y los dirigentes del PSOE y el PCE. La intención de la burguesía era meridianamente clara: asociar a los dirigentes reformistas a sus planes de estabilización de la situación política y económica, y capear así, con su inestimable ayuda, los riesgos de una explosión social que pudiera poner en cuestión los fundamentos del orden capitalista.

Los Pactos de la Moncloa fueron la máxima escenificación de una política de renuncia a convertir el colapso del franquismo en una oportunidad para la revolución socialista. A pesar de que fueron fuertemente contestados por un sector importante de las bases sindicales, las medidas pactadas se impusieron, marcando un punto de inflexión en la política sindical cuyos efectos alcanzan hasta el día de hoy.



Firmantes de los Pactos de La Moncloa

El contenido de los Pactos fue doble. Por un lado se firmaron unos acuerdos políticos y jurídicos que ayudaron a estabilizar el aparato del estado y que contribuyeron a reconstruir su legitimidad. Especial relevancia tuvieron los acuerdos sobre reorganización de las llamadas Fuerzas de Orden Público, que supusieron el entierro definitivo de la reivindicación de disolución de las fuerzas represivas y la renuncia de las fuerzas de izquierda a pedir cuentas por los crímenes de la dictadura. Los jóvenes que hoy se interesan por la recuperación de la Memoria Histórica, y que se asombran de que haya habido que esperar tantas décadas para que simplemente se empiecen a abrir las fosas comunes del franquismo y se dé una sepultura digna a las decenas de miles de hombres y mujeres asesinados por sus ideas, deben de saber que los Pactos de la Moncloa ayudaron a extender un velo de impunidad sobre los cuarenta años de horror de la dictadura.

Pero el plato fuerte de los Pactos de La Moncloa fueron los acuerdos económicos, que se organizaron en torno a tres grandes ejes:

- Una política presupuestaria y monetaria restrictiva, para reducir el déficit público y la masa monetaria.
- Establecimiento de topes salariales, mediante la supeditación de los incrementos de los salarios a la inflación prevista para el siguiente año, en vez de al aumento real de los precios.
- Medidas de flexibilización de la contratación, que se concretaron en la autorización de la contratación temporal para parados y jóvenes en busca de primer empleo, y en la introducción de facilidades para el despido libre, aunque limitado al 5% de la plantilla.

Supuestamente, estas medidas iban a servir para relanzar la economía, resolver el incipiente problema del paro, y abrir un futuro económico de prosperidad del que tam-

bién se beneficiarían los trabajadores. Treinta y tres años después, la revisión de los efectos de los Pactos es demoledora.

Resultados de los Pactos

Las políticas de restricción del gasto y la inversión públicas, unidas a las políticas monetarias restrictivas tuvieron como consecuencia inmediata el cierre o reducción de la actividad de miles de empresas. Durante los años del franquismo, la burguesía había disfrutado de unas políticas de crédito barato y de un entorno proteccionista que la defendía frente a la competencia exterior. Asimismo, la política de constante devaluación de la peseta facilitaba la exportación y la entrada de turistas. De esta forma, durante los años 60 la burguesía acumuló ingentes beneficios que, en lugar de reinvertirse de forma productiva, se destinaron a la especulación y otras actividades parasitarias.

Al iniciarse la crisis de 1973, los empresarios deciden poner sus inmensas reservas a buen recaudo, y se inicia así un período de fuga de capitales hacia paraísos fiscales (especialmente Suiza), que descapitaliza a muchas empresas. Las incertidumbres políticas de la época aceleran este proceso, de modo que cuando entran en vigor las medidas previstas en los Pactos, un gran número de empresarios opta simplemente por recortar la actividad de sus empresas, o directamente por cerrarlas, dejando a miles de trabajadores en el paro.

Esta situación, unida a las nuevas facilidades para el despido y la contratación temporal, provoca un incremento masivo del desempleo, cuyos efectos duran hasta hoy.

En el segundo trimestre de 1977, el paro afectaba al 4,9% de la población activa del Estado español, algo menos de un millón de trabajadores. A raíz de los Pactos de la Moncloa el paro sube hasta los dos millones (tercer trimestre de 1981), y escala hasta los tres millones (último trimestre de 1984). Durante varios trimestres el número de parados no bajó de los tres millones, y en el primer trimestre de 1986 batió su récord al alcanzar una tasa de paro del 21,65% (3.053.000 trabajadores).

Por supuesto, el objetivo de bajar el paro por debajo del 5% no se alcanzó jamás, y habría que esperar hasta el año 2000 para que la tasa de paro bajase del 15%.

Las políticas de tope salarial también tuvieron un efecto duradero sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora. En los años inmediatamente ante-

riores a los Pactos, la participación de los asalariados en la Renta Nacional fue incrementándose de forma constante, en gran medida debido a las luchas obreras que comenzaron a extenderse desde los años 60. En 1975, los salarios representaban el 62,8% de dicha Renta, y en 1977, en medio de las grandes movilizaciones de la Transición, alcanzaron el 64%.

A partir de los Pactos, y a pesar de que en algunos años se consiguieron avances en los salarios reales, la participación de los trabajadores en la riqueza del país empezó a caer drásticamente, hasta el punto de que en 1995 ya sólo representaba el 49% de la Renta Nacional. Los quince puntos porcentuales de diferencia engrosaron, en su mayor parte, los beneficios del capital, que ya en 1978 iniciaron una clara senda ascendente.

Las medidas de "flexibilización de la contratación", que permitían la contratación temporal y el despido libre con ciertas restricciones, no sólo no promovieron la creación de empleo, sino que, bajo la presión de los empresarios, fueron extendiéndose en los años siguientes. Todos los límites y cautelas que sirvieron a los dirigentes reformistas para restar trascendencia a estas concesiones fueron eliminados poco a poco, y la precariedad y el despido fácil y barato han seguido extendiéndose hasta el día de hoy.

Balance y conclusiones

A la vista de la situación de la economía española tres décadas después de los Pactos, puede concluirse que su efecto más importante fue el de apuntalar un capitalismo débil y parasitario, caracterizado por sus bajísimos niveles de inversión e innovación, por su alergia a la inversión productiva, y por su preferencia por resolver sus problemas de rentabilidad a costa de la sobreexplotación de la clase trabajadora.

Los Pactos de la Moncloa facilitaron una extraordinaria acumulación de beneficios, basados en los bajos salarios relativos. Contribuyeron a crear una bolsa estructural de paro, de unas dimensiones desconocidas en otros países capitalistas de nuestro entorno, y que constituye un lastre terrible sobre el conjunto de la economía. Pero ese paro estructural resultó muy útil a los empresarios. Gracias a la presión de ese ejército industrial de reserva, al que unos años después se unieron varios millones de trabajadores inmigrantes, los salarios pudieron mantenerse muy bajos, y las condiciones de trabajo endurecerse hasta límites propios del siglo XIX.

Los beneficios obtenidos no se dirigieron a la modernización de la estructura productiva del país. Por el contrario, la especulación improductiva en la bolsa y en deuda pública y, muy especialmente, en el sector inmobiliario contribuyeron a crear las burbujas financieras que dieron lugar a la crisis que ahora pretenden que paguemos entre todos los trabajadores.

De modo que cuando en enero de 2011 los sindicatos pactan con Zapatero el recorte de las pensiones, cuyo motivo último es la necesidad de cubrir el terrible agujero bancario creado por el hundimiento de la burbuja inmobiliaria, lo que en realidad hacen es intentar paliar con la misma medicina los males que sus políticas equivocadas ayudaron a crear hace más de 30 años. En nuestras manos, como afiliados a los sindicatos de clase, está el poner punto final a esta escalada de concesiones que sólo ayuda a hacer a los ricos más ricos, que extiende la miseria entre los trabajadores y jubilados, y que ayuda a sentar las bases de futuras y aún más dañinas crisis.



Pancartas contra los Pactos de la Moncloa de secciones sindicales de la UGT

[Extracto de la declaración de la CMR, ver íntegra en www.elmilitante.net]

Los extraordinarios acontecimientos que se están sucediendo a ritmo vertiginoso en los países árabes son un hito histórico. Estamos asistiendo a un proceso revolucionario clásico en toda la región, proceso que se inició en Túnez con el levantamiento contra la dictadura de Ben Alí, que continúa en este país contra un Gobierno que pretende reformar desde arriba el régimen para que nada cambie, que se traslada a Egipto, donde las masas han herido de muerte a la dictadura de Hosni Mubarak, y que tiene poderosas influencias en todos los países árabes y en todo el mundo.

El papel determinante de la clase obrera

Esta revolución es un punto de inflexión en la historia moderna del pueblo árabe. Por primera vez los trabajadores, jóvenes y campesinos han sido protagonistas, de principio a fin, de la lucha y de la caída de la tiranía tunecina. En esta ocasión no han apoyado a ninguna figura que tomara medidas progresistas, ni ningún golpe de Estado para acabar con una monarquía corrupta (como el que protagonizó Nasser en Egipto en 1952). Esta vez están viviendo, sin interferencias, la extraordinaria experiencia del gran poder de las masas cuando actúan colectivamente. Otro aspecto histórico de la situación actual es la rápida extensión revolucionaria. Millones de árabes recuperan la confianza en la lucha, a pesar de brutales represiones y de las maniobras de la oposición domesticada y de la reacción integrista. Cómo se exprese, y con qué rapidez, este proceso, en cada país, depende de múltiples factores, sin embargo el proceso es general y ningún régimen árabe puede escapar a la situación de inestabilidad. Especial importancia tiene lo que pueda pasar en los dos países clave del Magreb: Argelia y Marruecos. En Argelia ha habido importantes manifestaciones a principios de enero (la represión provocó cinco muertos), y rebelión juvenil, y están convocadas para febrero grandes movilizaciones. En el caso marroquí, 12.000 personas se han adherido a una convocatoria hecha en Facebook, para el día 20 de febrero, por Oussama el Khlifi, un parado de 23 años, exigiendo la amnistía de los presos políticos, acabar con la corrupción, y la derogación de los poderes absolutistas de Mohamed V.

La rápida extensión de la revolución, la enorme capacidad de lucha, ha sido en gran parte producto de la participación masiva de sectores habitualmente poco organizados y politizados. Jóvenes en paro, trabajadores de sectores periféricos, campesinos arruinados... Sin embargo, el papel de la clase obrera ha sido y es especialmente clave. La determinación de los más oprimidos, y la fuerza de la clase obrera, está arrastrando consigo a la gran mayoría de capas medias.

El desmantelamiento y privatización, a lo largo de treinta años, de los antaño poderosos sectores públicos en algunos de estos países (especialmente Argelia, Túnez, Egipto), y en general, en todos ellos, la opresión imperialista que ha extraído recursos a bajo precio y utilizado en su beneficio a las diferentes camarillas de poder, ha tenido un efecto drástico en la eliminación de las bases sociales de esos regímenes y, en el último periodo, en el auge de la lucha obrera, estudiantil y de sectores de las capas medias. La correlación de fuerzas es tan favorable que la revolución ha tenido un impacto incluso en el aparato del Estado. Ha habido numerosas muestras de simpatías de los soldados e incluso de la policía en los acontecimientos de Túnez y Egipto.

Esta revolución no se puede entender fuera del contexto internacional. Su razón de fondo es la crisis orgánica del capitalismo. El anterior boom económico mundial no benefició a las masas árabes, al contrario. El alto precio del petróleo y el gas natural, productos claves de muchos de estos países, só-

lo lucró a las camarillas dirigentes y a las multinacionales petroleras y gasísticas, mientras la población sufría el mismo proceso de privatizaciones y saqueo que el resto de países explotados por el imperialismo

La crisis económica actual ha empeorado la situación de las masas. El símbolo de la lucha, en sus primeros embates, fueron los manifestantes empujando barras de pan, y es que la lucha contra el aumento abusivo de los precios de los productos básicos, especialmente desde 2008, fue el detonante de la revolución, de igual forma que lo fue de las llamadas *revueltas del pan* que se extendieron por todo el Magreb en los 80. En gran parte, ese aumento es debido a la intensa especulación mundial en el mercado de la alimentación, mercado que es uno de los principales refugios de los especuladores que huyen del pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

La correlación de fuerzas desfavorable para el imperialismo le está obligando a un súbito cambio de táctica. Se trata de garantizar su dominio (y el de las camarillas cómplices) sobre estos países, a través de nuevas formas, formas más sutiles. Es decir, de implicar a la oposición "tolerada" en las instituciones, de hacer cambios cosméticos, de desprenderse de los elementos más putrefactos y odiados que tan buenos servicios han rendido hasta ahora. Sin embargo, esta táctica también tiene muchos interrogantes. Si estas reformas se producen al calor de la movilización masiva, la estimularán más. Tanto si son valoradas como insuficientes, como si son vistas como pequeños pasos adelante, la conclusión del movimiento será clara: tenemos fuerza, el enemigo es débil, por tanto hay que redoblar la lucha. Por otra parte, la mayoría de partidos de oposición no tiene autoridad suficiente entre las masas como para actuar de freno de ellas.

Esta nueva táctica no descarta en absoluto la represión masiva contra el movimiento, en un determinado momento, incluso a través de la intervención militar directa (Estados Unidos tiene planes de ocupar el canal de Suez antes de perder su control), especialmente si se llegan a tocar las bases mismas de la explotación capitalista (por ejemplo, si se nacionalizan las propiedades imperialistas).

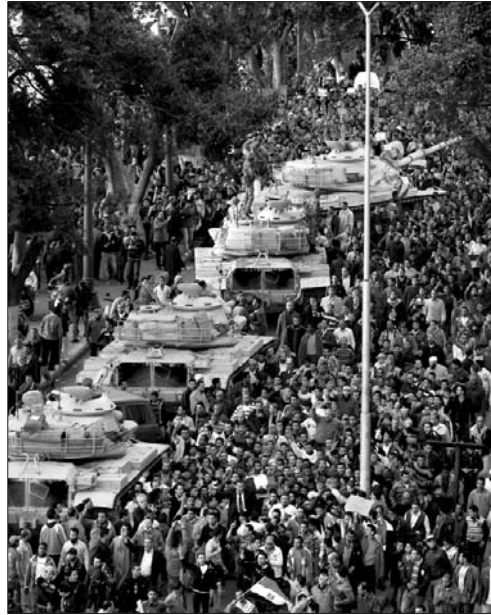
Túnez, la revolución en una nueva fase

En el caso de Túnez, la revolución se encuentra en una segunda fase, a partir de la huida de Ben Alí. Una de las peculiaridades del proceso aquí es la participación en la insurrección de las bases de la UGTT (Unión General Tunecina de Trabajadores). La Unión, de hondas tradiciones históricas, mantuvo una posición contradictoria ante el régimen, de colaboración en su cúpula, y de oposición en muchos de sus sindicatos locales y sectoriales. Ante la falta de un partido de oposición real con presencia entre las masas, el sindicato ha sido el referente de la insurrección. En algunos sitios ha espoleado el movimiento, en otros se ha adherido a él renqueando.

Del 14 de enero, día de la huida de Ben Alí, al 17 de enero, día en que se formó el gobierno actual, transcurrieron unas jornadas clave. En esos días las masas tenían el poder real, y la posibilidad de formalizarlo con un Gobierno revolucionario, pero no tenían ninguna organización, al menos de importancia, que les hiciera conscientes de esta posibilidad. Desde antes de que huyera Ben Alí, su camarilla, la cúpula del Ejército, y el imperialismo, maniobraron para arrebatar su victoria al movimiento. Mohamed Ghanuchi, primer ministro del dictador, se hizo cargo del poder formal, alegando la incapacidad "temporal" de Ben Alí para gobernar. Esto no era en absoluto suficiente para parar la revolución, por eso el propio régimen en retirada impuso a Fouad Mebazaa (hasta entonces presidente del

Las masas impulsan la revolución

¡Abajo las dictaduras! ¡Por una Federación!



Parlamento) como presidente interino, prometió amnistía y elecciones inmediatas, y llamó a la formación de un "Gobierno de unidad nacional" con miembros de RCD (Agrupación Constitucional Democrática, el partido de la dictadura), de la oposición legal (sin autoridad ante el movimiento) y, especialmente, de la UGTT. La idea de la "unidad nacional" es una gran trampa, ¿qué unidad nacional puede haber entre los que se han lucrado con la dictadura y los que han sido oprimidos por los primeros?, ¿entre los que quieren ahogar la revolución —aunque ahora digan que están a favor— y los que no tienen nada que perder, salvo sus cadenas?! Con esta maniobra el capital nacional e internacional quería retomar el control de la situación, calmar a las masas, que volvieran a casa los manifestantes que permanecían enfrente del Ministerio del Interior. Pero no fue así. La presión popular obligó a los recién nombrados ministros de la UGTT a dimitir, a salir del parlamento y otros órganos y a no reconocer ninguna de las instituciones de la dictadura (es decir, de las instituciones burguesas). La revolución no aceptó un gobierno con participación de miembros de RCD, y se mantuvo firme exigiendo su expulsión del gobierno, la disolución del partido y la confiscación de sus bienes. Los manifestantes, intentaron tomar la sede de RCD. Durante días la reacción no pudo controlar la situación; se sucedieron las visitas a la sede de la UGTT para presionar. Si en ese momento el sindicato hubiera creado un órgano de gobierno revolucionario provisional, encargado de extender los comités que se estaban organizando, con el fin de preparar una alternativa de Estado al Estado burgués, una Asamblea Revolucionaria de Comités, con delegados elegidos en asamblea y revocables, habría tenido un impacto tremendo. Finalmente, la cúpula de la UGTT, después de una reñida discusión, decidió apoyar la última propuesta de gobierno presentada, que implica la salida de los miembros de RCD manteniendo en su puesto a Mohamed Ghanuchi. Su argumento fue "preservar la estabilidad". Eso sí, no se atrevió a aceptar su participación en el gobierno.

El movimiento en Túnez necesita de experiencias como éstas para entender las tareas del momento. La revolución no ha terminado, las masas desconfían intuitivamente de este gobierno, y no van a esperar para intentar solucionar sus problemas más inmediatos. Mientras los ministros corren a

presentarse en el Foro de Davos y calmar al capital internacional, las masas intentan completar la revolución. En poblaciones de algunas regiones, como Susa o Siliana, las autoridades del régimen huyeron y la población movilizada les ha sustituido con comités revolucionarios. En El Kef, el intento de asalto, por parte de las masas, a una comisaría, el 6 de febrero, exigiendo la dimisión de los responsables policiales, ha tenido el resultado de cuatro muertos.

A las reivindicaciones democráticas y sociales (depuración profunda de la policía y el aparato del Estado; derecho de manifestación, huelga, organización; disolución de RCD; expropiación de sus bienes y los de toda la camarilla de Ben Alí; enjuiciamiento de todos los responsables de la dictadura; renacionalización de todas las empresas privatizadas y de las concesiones al imperialismo; aumento general de salarios y tope para los precios de los productos básicos; reforma agraria, etc.) hay que añadir la consigna de la huelga general indefinida para tirar el Gobierno y la de creación y extensión de comités revolucionarios en cada barrio, empresa, Universidad, coordinándolos a nivel local y nacional. Para esta tarea es imprescindible un trabajo sistemático, tanto directamente en el movimiento, como dentro de la UGTT, apoyándose en los sectores combativos para presionar y en determinado momento sustituir a los elementos burocráticos.

Egipto, el país clave

Egipto es el país clave en el mundo árabe, tanto por su población de 80 millones como por su peso económico, cultural e histórico. El martes 25 de enero comenzaron las manifestaciones, y, desde el viernes 28 hasta el viernes 4 de febrero, millones de personas se han hecho con el control de las calles, no sólo en El Cairo, sino también en Alejandría, Suez y las principales ciudades. El referente del movimiento es la ocupada plaza Tahrir, donde existe un nivel de organización impresionante, con controles para evitar el paso de provocadores, puntos sanitarios, provisión de suministros, recogida de basura, actividades lúdicas y culturales, etc. La determinación de las masas ha podido superar los diferentes obstáculos con los que se han encontrado: la feroz represión policial (se habla de cientos de muertos), la presencia intimidante del Ejército desde el domingo 30, la maniobra de presentar a po-

Revolución en el mundo árabe

Las proimperialistas! En Socialista Árabe!



licías sin uniforme, mercenarios y fascistas como “manifestantes pro Mubarak” y de enfrentarlos, armados y muy bien organizados, a los revolucionarios de la plaza Tahrir, para desalojarla o al menos dar la impresión de caos. Tras este grave ataque, que provocó varios muertos el lunes 31, pero que no consiguió el desalojo de la plaza ante el arrojido de su defensa, la siguiente convocatoria, el viernes 4, no sólo no fue menor, sino que ha sido la más masiva hasta la fecha.

Existe una coyuntura extremadamente inestable que se puede romper por cualquier lado. A pesar de la tremenda fuerza del movimiento, Mubarak no ha caído. El equilibrio está en el punto de ruptura, una situación así no se puede mantener por más tiempo. Mubarak no puede gobernar con millones de personas paralizando la producción y retándole en las calles. No puede reafirmar su autoridad cuando diez días de toque de queda han sido desobedecidos sistemáticamente por la población. Pero las masivas manifestaciones, sin más, no siempre son suficientes para echar a un dictador (y, de hecho, normalmente no lo son).

Todo apunta a que intentarán llegar a un acuerdo temporal con la oposición, bendecido por el imperialismo e incluso el propio Mubarak. Como hemos dicho, los imperialistas quieren apartarle del poder, pero pretenden presentarlo como parte de un acuerdo y no como consecuencia directa de la acción de masas. Controlar desde arriba los sucesivos pasos hacia un régimen similar con formas más sutiles, que el movimiento no sea consciente de su fuerza, y retomar el control de la situación. ¡También la clase dominante saca sus conclusiones de Túnez!

Dicho esto, no podemos descartar otras posibilidades, incluyendo la resistencia de una parte del aparato estatal a perder poder y el intento de utilizar el Ejército para un baño de sangre que dé una lección a la revolución. En este último caso, o si el régimen no mide bien provocaciones como la de forzar el desalojo violento de la plaza Tahrir, podrían estimular la respuesta de las masas, y la división de las tropas.

Tanto en Túnez como en Egipto, las maniobras para descarrilar la revolución tienen aliados. Se trata de los opositores legales al régimen, alternativas burguesas que Estados Unidos mima desde hace tiempo. Es el caso de Mohamed el Baradei, que intenta presentarse como líder de la revolución. Por otro, organizaciones integristas como En Nahda en Túnez o los Hermanos Musulma-

nes en Egipto. Estas organizaciones tienen un programa tan reaccionario en lo económico (defienden el capitalismo) como en lo social, y no han participado prácticamente en las luchas de masas contra el régimen, haciendo un papel de contención. Por su parte, el imperialismo intenta asustar a los trabajadores del mundo con el espantajo islamista, vinculando la revolución con la reacción fundamentalista. Por último, la política estalinista de las dos etapas de la revolución (primero un desarrollo prolongado de un capitalismo nacional, que llevara a cabo las tareas históricas de la burguesía; después la lucha por el socialismo), la búsqueda permanente de alianzas con un supuesto sector nacionalista, progresista, antiimperialista, dentro de las diferentes burguesías nacionales, o del aparato del Estado o del Ejército, despreciando y conteniendo las movilizaciones de masas y sus reivindicaciones, ha llevado, a los partidos comunistas *oficiales*, al triste papel de comparsas del régimen.

Desgraciadamente para sus planes, ninguna de estas organizaciones tienen autoridad ante la gran mayoría de los participantes en la lucha, y especialmente no la tienen entre la clase obrera y entre los sectores más oprimidos que han despertado. No han estimulado la movilización, no la han orientado, ni siquiera se han desmarcado del régimen hasta el momento mismo en que estaba ya en la picota. Esto significa que tendrán enormes problemas para hacer tragar a las masas acuerdos o gobiernos de “unidad nacional”.

En el caso de Egipto, el primer intento serio de descarrilar la movilización fue la formación de un “consejo de sabios”, que llamó a “considerar” la negociación directa con Mubarak o su vicepresidente, Omar Suleimán, idea rechazada por los manifestantes, que obviamente no se contentan con menos que con la caída del dictador. En estos momentos la oposición legal y los Hermanos Musulmanes, después de negarse a negociar “mientras no dimita Mubarak”, ya están haciéndolo. Si llegan a algún acuerdo, unido al cansancio natural, podrían desanimar momentáneamente la movilización, pero a costa de que las masas saquen las conclusiones adecuadas del carácter de esas organizaciones. Pero también existe el riesgo si Mubarak no se marcha, de que el movimiento decida no ceder y continuar en la calle. También en Egipto la cuestión de los comités es decisiva. Igual que en Túnez, exis-

ten multitud de comités; por otra parte, el día 30 de enero se formó la Federación Egipcia de Sindicatos Independientes, que aúna a trabajadores de la industria y servicios públicos y a jubilados, y que en su declaración pública “invita a todos los trabajadores egipcios a crear comités civiles para defender sus lugares de trabajo, a los trabajadores y a los ciudadanos en estos momentos críticos y a organizar acciones de protesta y huelgas en los lugares de trabajo, con excepción de los lugares de trabajo en sectores vitales, para que se lleven a cabo las demandas del pueblo egipcio”. Es vital extender los comités, y vincularlos a la necesidad de la autodefensa de la revolución (defensa de los locales sindicales y de los manifestantes, proselitismo entre las tropas, etc.).

Qué democracia necesitan las masas árabes

La convocatoria de elecciones libres, tan ansiado por el movimiento, en manos de la reacción es un señuelo (en forma de promesa vaga) para vaciar de contenido revolucionario al movimiento. Los imperialistas y la burguesía árabe intentan centrar la atención en este punto y esconder el profundo contenido social de la revolución. Las palabras “libertades democráticas” suenan igual, pero significan distinto, en boca de los burgueses y de los obreros. Para los primeros, sólo puede significar levantar un escenario aparentemente democrático, donde se discutan cuestiones menores mientras las decisiones fundamentales las sigan tomando ellos (la burguesía árabe y los imperialistas), a la vez que ponen todas las trabas necesarias para que esas libertades formales no puedan poner en cuestión quién tiene el poder real. Para los trabajadores, “libertades democráticas” significa plenos derechos de organización, de expresión, de manifestación y mejoras materiales que les permitan avanzar en su lucha por una vida sin explotación. Sólo con un programa socialista será posible una democracia real, la democracia de los trabajadores y el resto de oprimidos.

La situación actual en los países árabes reivindica plenamente la teoría de la revolución permanente desarrollada por León Trotsky. La única posibilidad de realizar plenamente las aspiraciones democráticas de las masas, y mejorar radicalmente sus condiciones de vida, es tomando medidas decisivas contra el imperialismo y el capitalismo. Expropiando las multinacionales que han robado la propiedad estatal y saquean los recursos naturales de estos países; las empresas de las camarillas dirigentes, y militares; la banca, y otras grandes empresas capitalistas; incautando las extensiones de tierra de los grandes propietarios y llevando a cabo una auténtica reforma agraria en beneficio de las masas campesinas, la población tendría los medios para elevar los salarios, desarrollar las infraestructuras, establecer servicios sociales, sanidad y educación pública y se podría ofrecer una vida digna a toda la población. La más amplia y profunda democracia, por la que luchan las masas oprimidas, sólo puede realizarse de forma concreta acabando con el poder del imperialismo y de la burguesía árabe, que son las dos fuerzas que están detrás de todas estas crueles dictaduras. La clase obrera árabe, encabezando a todos los oprimidos de la sociedad, debe tomar el poder en sus manos, igual que hicieron los trabajadores y campesinos pobres en Rusia durante la revolución de octubre de 1917. Sólo así, estableciendo las bases para un Estado obrero y socialista, es posible garantizar un amplio desarrollo económico, social y cultural del pueblo árabe.

La estructura del Estado burgués no sirve para los fines de una democracia obrera. Es necesario crear las condiciones para la sustitución de las podridas estructuras de la dictadura, que ahora pretenden restaurar con un barniz democrático, por la estructura que, de forma irregular, inconstante, imperfecta, está surgiendo en la población de

Túnez y Egipto: los comités de diferente tipo que agrupan a las masas organizadas, especialmente de la clase obrera. Mantener contra viento y marea esos comités, extenderlos, coordinarlos, y perfeccionarlos, organizando las tareas, no sólo de la lucha, sino también de todos los aspectos de la vida social, sentará las bases para sustituir el caduco Estado burgués por un Estado mil veces más participativo y democrático: un Estado de los comités, un Estado socialista, donde cada representante sea elegido y revocable por la asamblea que lo elige, donde ninguno cobre más que el salario medio de un obrero cualificado, donde las funciones de representación se empiecen a realizar de forma rotatoria, y donde el pueblo organizado y armado sustituya al ejército permanente. Esta democracia de los comités podrá garantizar la máxima libertad de expresión y organización, sin mayor límite, evidentemente, que las medidas necesarias para contrarrestar la resistencia violenta de la reacción.

Mientras los activistas, y especialmente la clase obrera, lucha por extender y profundizar los comités, y se crean las condiciones para que ésta dirija al resto de la sociedad hacia la toma del poder, es necesario desmascarar todas las maniobras pseudodemocráticas del imperialismo. Como los maquillajes baratos de los antiguos regímenes está siendo insuficientes para aplacar la revolución, es previsible, en determinado momento, que adopten la bandera, aparentemente rupturista, de la Asamblea Constituyente. La convocatoria, o la promesa de convocar una Asamblea Constituyente, es un engaño. Sin tocar las bases materiales del poder de la burguesía, cualquier tipo de asamblea se enredará en todo tipo de discusiones y maniobras parlamentaristas, que polemizarán sobre aspectos secundarios. Mientras, los oprimidos, los protagonistas de la insurrección, verán pasar el tiempo sin ninguna perspectiva concreta de solución de sus perentorios problemas: el paro, la carestía de la vida, la explotación, la reforma agraria, la depuración del Estado. De esta forma la clase dominante intentará cansar al sector más consciente y activo de las masas, aislarlo del resto y recuperar plenamente su control.

Es imprescindible contraponer a esta consigna vacía, de la que ya se hacen eco algunos grupos de izquierda, la de un Parlamento Revolucionario basado en el poder de los comités, con diputados elegidos por estos comités revolucionarios, cuyo objetivo sea llevar hasta el final la revolución, rompiendo con todos los elementos del viejo régimen, aplicando sin ningún tipo de concesión las profundas reivindicaciones democráticas, y las medidas socialistas de lucha contra el capital necesarias para llenarlas de contenido. Un llamamiento a desarrollar el poder de los comités, establecer este parlamento revolucionario y un gobierno socialista, electrizaría la participación de todos los oprimidos.

Para la defensa de este programa se hace urgente y necesaria la construcción de un referente político genuinamente revolucionario y marxista, capaz de agrupar a los sectores más combativos y conscientes de la clase obrera y de la juventud árabe, y tras ellos al conjunto de las masas oprimidas. La existencia de un partido marxista con raíces en el movimiento es la única garantía para neutralizar eficazmente las inevitables maniobras de la burguesía y del imperialismo, consistentes en impulsar alianzas “de todos los demócratas” y promover a “amigos del pueblo” con el fin de anular la acción independiente de la clase obrera y descarrilar el proceso revolucionario.

La actual revolución en el mundo árabe está demostrando en la práctica su carácter internacionalista. Por eso hoy más que nunca, la lucha de los oprimidos exige de un programa socialista e internacionalista para luchar por la creación de una Federación Socialista Árabe, para acabar con el atraso, la miseria, el sectarismo y el integristismo religioso.

El gran negocio del tabaco

Felipe Palacios

La nueva ley contra el consumo de tabaco en lugares públicos y la subida de su precio, dos veces en poco más de un año, han disparado las alarmas en las grandes tabaquerías que se reparten el mercado mundial. El ejemplo de esta ley en el Estado español, donde los fumadores son más de diez millones y los precios del tabaco están por debajo de los de Reino Unido, Alemania o Francia puede ser un precedente peligroso para su negocio.

Cinco grandes multinacionales se reparten el mercado mundial del tabaco, la mayor de ellas es la norteamericana Philips Morris. Le siguen, BAT de Reino Unido, Japan Tobacco e Imperial Tobacco de Reino Unido (que absorbió a Altadis en 2008, de la cual formaba parte Tabacalera Española que fue privatizada en 1998).

Por dar sólo un ejemplo del poder económico de estas empresas, el grupo al que pertenece Philips Morris, Altria Group, facturó 101.407 millones de dólares en 2004. Estas multinacionales son las que están incentivando la movilización de un sector de los hosteleros, exagerando los casos puntuales de insumisión a la nueva ley para dar la sensación de que no se cumple, y cuentan con la complicidad encubierta de algunas comunidades autónomas —como la de Madrid, donde Esperanza Aguirre se ha posicionado en contra de la ley— que no cuentan con inspectores suficientes para todos los locales hosteleros.



Pero no sólo las tabaquerías ganan dinero, los impuestos sobre el tabaco son una fuente de recaudación para la Hacienda pública que obtiene más del 80% del precio final del tabaco. En 2010 se recaudaron 9.266 millones de euros de los impuestos especiales y del IVA del tabaco. Desde 1990 el Estado ha recaudado más de 100.000 millones de euros procedentes de los fumadores y a esto hay que añadirle las últimas subidas de precio en diciembre de 2010. Esta subida fue justificada en aras de “una economía más saludable y sostenible” y para rebajar el déficit público; según el gobierno la rebaja en la fiscalidad de las pymes, el coste de los “orientadores de empleo” y la ampliación del plazo para la amortización de la deuda a las empresas hacía necesario recaudar más dinero, teniendo en cuenta que los impuestos indirectos gravan por igual a to-

dos independientemente de las rentas, son los trabajadores los que subvencionan a los empresarios a través de un producto de consumo masivo.

El tabaquismo, un problema social

El gobierno se mueve en el tema del tabaco igual que en otros muchos, ni contenta a los amigos ni amedrenta a los enemigos. Quisieran acabar con el consumo tan exagerado de tabaco pero sin que las tabaquerías se enfadasen, que los fumadores se deshabituasen pero sin gastar dinero en tratamientos y eso en este mundo regido por la búsqueda del máximo beneficio es imposible. Un gobierno que quisiese de verdad acabar con el tabaquismo debería exigir a las grandes empresas que dejasen de añadir sustancias adictivas, que en las cajetillas figurase qué lleva

exactamente el tabaco y que por supuesto tuviese fecha de caducidad, el poder de las multinacionales tabaquerías es tal, que estas condiciones que cumple el producto más sencillo en cualquier supermercado se las saltan a la torera.

El consumo y la producción masiva de cualquier producto es la sangre del capitalismo, aunque este consumo genere enormes gastos a la sanidad pública. El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo calcula que los gastos sanitarios y sociales derivados de las enfermedades generadas por el tabaco suponen el 2% del PIB del Estado español; podemos resumir que por cada euro ingresado por el tabaco se gastan dos en sanidad, el negocio es redondo para las tabaquerías, las consecuencias sanitarias del uso del tabaco las paga el Estado.

Las pruebas científicas son irrefutables, el tabaco es perjudicial para la salud y debería ser una obligación que un gobierno que se llama socialista acabase con su consumo, pero esto no se puede hacer por la vía exclusiva de la prohibición o de aumentar su precio, sería necesario un plan que empezase por la eliminación de las sustancias más adictivas que se le añaden al tabaco, con la gratuidad de los tratamientos anti-tabaco y con buenas campañas publicitarias para crear un clima que favoreciera el abandono del tabaco y también planes para relocalizar a todos los trabajadores del sector. Pero precisamente el ambiente social y laboral invita a todo menos a la tranquilidad y el sosiego. El paro, la precariedad y la falta de perspectivas vitales son las que inducen al consumo convulsivo de todo tipo de sustancias intoxicantes, acabar con el tabaquismo no es sólo un aspecto sanitario sino que también está ligado a la lucha por transformar la sociedad.



Cartas a la redacción

Da las gracias por tener trabajo

Un licenciado en paro

Estudiar en la universidad no es cosa fácil para los hijos de la clase obrera: en la mayoría de los casos tenemos que trabajar y estudiar a la vez, lo cual nos pone difícil aprobar el curso completo y nos hace entrar en un círculo vicioso: si no apruebas no tienes beca, y sin beca tienes que trabajar. Uno podría pensar que al terminar la carrera todo este esfuerzo tiene su recompensa, pero la realidad es otra.

Este es mi caso, pues tras años de estudio en la universidad me encuentro sin trabajo de ningún tipo y es interesante lo que desde la administración, vía Servicio Público de Empleo Castellano-Manchego (SEPECAM) nos ofrecen:

1) Acudo convocado a una reunión para “licenciados en desempleo” a la que estoy citado a las 13h. junto a una tanda de otros cincuenta jóvenes parados, enseguida nos damos cuenta de que llevan toda la mañana reuniéndose con jóvenes licenciados en paro. El consejo de la técnica de orientación laboral es contundente: “No os desaniméis porque el que quiere trabajar al final lo consigue”. Para ello nos pone el ejemplo de una joven que tras realizar su tercer máster universitario al final ha conseguido un empleo... Lo que no dijo esta señora es en qué condiciones, con qué salario y por cuánto tiempo habían contratado a esta joven titulada tras su tercer máster* a precio de oro... ¿Tal vez con contrato de obra y servicios, haciendo horas extras *por la cara* y cobrando poco más de 600 euros al mes? Aunque todos imaginamos que así era, la técnica de orientación tuvo a bien no decirlo para no desanimarnos.

2) En mi segunda cita con el servicio de Orientación del SEPECAM, la solución del orientador de turno fue más clara: “Os aconsejo tal y como están las cosas en este país y la perspectiva de futuro que hay, que busquéis trabajo fuera”. Simple, llano y directo: el consejo del experto del Servicio Público de Empleo es la emigración.



3) Para paliar el desempleo y fomentar la contratación de jóvenes licenciados/as, el SEPECAM ofrece a la empresa privada una subvención de 3.000 euros para contratos de licenciados en prácticas por una duración mínima de 6 meses. Al final conseguí un trabajo por esta modalidad en una fundación privada “sin ánimo de lucro”, cobrando 625 euros y con categoría de auxiliar administrativo de segunda (lo cual era un claro fraude de ley siendo un contrato de prácticas para licenciados). Hay que decir que esta fundación, dirigida por una ex diputada del gobierno regional, servía sólo para contentar a esta *vieja gloria* por sus servicios prestados, complicidades y amistad personal con ciertos dirigentes. El dinero de las subvenciones, que se ahorra en pagar salarios dignos a sus trabajadores, se lo gastaba en viajes y cenas con amigos, sin nada que temer, porque al final la gente ante la que rendir cuentas eran “colegas”.

Además de hacer un trabajo presupuestado en la subvención para tres licenciados

teniendo que *echar* las correspondientes horas extras sin pagar, a los seis meses (necesarios para que la empresa cobre el regalo de los 3.000 euros) me vi en la calle sin trabajo, pero esperando denunciar las irregularidades (contrato de licenciado en prácticas con categoría de auxiliar administrativo de segunda) para que esta entidad “sin ánimo de lucro” no cobrase la subvención.

Pero mi tercer contacto con el Servicio Público de Empleo regional fue aún más bestia: Tras contar mi historia al funcionario de turno, éste se indigna y llama por teléfono a su superior para que semejante fraude de ley no quede impune. La respuesta telefónica del superior es que yo debería dar las gracias porque con mi titulación y los tiempos que corren me hayan dado trabajo, y confirma al funcionario que sí van a subvencionar este fraude de ley y tantos otros casos idénticos, “porque son órdenes de arriba” y lo importante es que los jóvenes salgan de las listas del paro.

Siguiendo esta lógica, en Castilla-La Mancha los jóvenes titulados son contratados, de manera generalizada, por 6 meses cobrando 625 euros a través de un contrato fraudulento subvencionado por la administración regional, en el que a la empresa pri-



vada le sale gratis contratar personal altamente cualificado con salarios de personal no-cualificado; el sueldo mísero lo pagamos todos con dinero público, pero el beneficio de nuestro trabajo se lo lleva la empresa privada.

Ante esta insufrible situación los “expertos” de la tele (esos estómagos agradecidos con carrera) ya han encontrado la solución para que no haya universitarios en paro o con trabajos basura: volver al tradicional sistema de “que estudien los de siempre”, que es decir los hijos de los ricos. La única alternativa que nos queda a estudiantes, parados y trabajadores explotados es organizarnos y hacerles frente, cuanto antes mejor.

* El negocio organizado en torno a másters y posgrados universitarios (sobre todo tras el proceso de Bolonia) a costa de los estudiantes es un sector en auge para aprovecharse de nuestra búsqueda desesperada de trabajo. Hoy en día las licenciaturas y diplomaturas están tan devaluadas que sin pagar uno o varios másters a precios desorbitados no puedes aspirar más que a trabajos basura u opositar... Pero como el gobierno redujo la tasa de reposición de funcionarios en un 90% (en consonancia con esta filosofía que defienden patronal y la UE de que la crisis la tenemos que pagar los pobres) ya no tenemos ni esa salida...

JORNADA DE ACCIÓN

Contra la imposición de la selectividad en la FP

16

de febrero

Comisión Ejecutiva Estatal
Sindicato de Estudiantes

El Ministerio de Educación aprobó el 17 de diciembre un severo endurecimiento del acceso a la universidad para los estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS), imponiendo de hecho la selectividad para los estudiantes de Formación Profesional este mismo curso, un nuevo obstáculo para que los hijos de los trabajadores puedan ir a la universidad.

Endurecimiento de la selectividad

Hasta ahora, los titulados en CFGS accedían a la universidad sin hacer ninguna selectividad, siempre que superaran la nota de corte específica para los estudiantes procedentes de FP. Una nota muy elevada en las facultades con más demanda, como por ejemplo, Enfermería y Odontología, en algunos casos superior al 9. Ahora, la nota de acceso será la media del ciclo formativo (diez puntos) y una selectividad de dos exámenes "voluntarios", que sumarán de dos a cuatro puntos dependiendo de cada universidad. Esto significa que los estudiantes de CFGS, que en el mejor de los casos hace dos años ya que aprobaron el bachillerato, se tienen que examinar de dos asignaturas de bachillerato que ni siquiera forman parte del temario del ciclo formativo que están cursando.

Mientras el gobierno hace campañas publicitarias para "dignificar la FP", en la práctica la condenan de antemano con el déficit de inversión y plazas públicas. Pero además con esta nueva selectividad transmiten la falsa idea de que los estudiantes de CFGS no están preparados para ir a la universidad. Este endurecimiento del acceso a la universidad complementa la implantación del nuevo modelo de selectividad que el gobierno llevó a cabo el curso pasado, y que da más valor a los exámenes de selectividad (hasta 8 puntos), frente al bachillerato (con un máximo de 6 puntos).

Este reforma ha supuesto la devaluación del bachillerato en la medida que cuenta mucho menos en la nota final que la selectividad, y en la medida que no ha aumentado el número de plazas en la universidad pública, la subida de notas (sobre 14 en vez de sobre 10) ha significado un aumento igual de importante de la nota de corte.

Contra los intentos de división entre estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional

En 2010 se suprimió el sistema de cuotas por el cual se reservaba un porcentaje de plazas en la universidad (20% de media) a



Concentración de estudiantes de Formación Profesional de Sevilla

estudiantes procedentes de CFGS. Los medios de comunicación y el Ministerio han centrado su atención en algún caso concreto para vender la imagen de que los estudiantes de FP eran unos "privilegiados" porque no hacían selectividad y estaban "acaparando" las plazas universitarias. Para ello utilizaban ejemplos como el caso de Educación Infantil en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), donde el 90% de las plazas han sido ocupadas por estudiantes procedentes de CFGS. Pero lo que no decían es que esto no es ni de lejos lo generalizado; de hecho, se pueden encontrar casos en sentido contrario más acentuados, como sucede en la misma UAB en la carrera de Veterinaria, donde de las 140 plazas de primero en 2010, sólo una ha sido ocupada por un estudiante procedente de CFGS, es decir, un 0,7% de las plazas.

El objetivo del Ministerio de Educación es claro: enfrentar a los estudiantes de Bachillerato y de Formación Profesional para que no luchemos conjuntamente contra el endurecimiento de la selectividad, que es un ataque al conjunto de los estudiantes de familias obreras, un nuevo intento de elitización de la universidad a través del endurecimiento del acceso.

En la Comunidad Valenciana el gobierno del PP intentó aplicar la misma medida a finales del curso pasado, y la respuesta rápida y contundente de los estudiantes consiguió que se retirara. Ahora se trata de un ataque a los estudiantes de todo el Estado, así que la respuesta debe estar a la altura del calado y envergadura del ataque. Por esto el Sindicato de Estudiantes convoca una jornada de acción estatal de estudiantes de CFGS contra la nueva selectividad el 16 de febrero con concentraciones en Barcelona, Sevilla y Córdoba y con asambleas en el mayor número de institutos de FP en el conjunto del Estado. Hacemos un llamamiento a los estudiantes de bachillerato, ESO y FP de

grado medio a participar en la movilización contra el endurecimiento de la selectividad. Para coordinar la lucha proponemos el reparto masivo de propaganda y la realización de asambleas de estudiantes en los institutos, donde además de discutir y votar la movilización del 16 de febrero y la plataforma reivindicativa, se formen comités de lucha, escogidos democráticamente, para coordinar e impulsar la movilización.

Aumento del número de plazas en la universidad pública

Este nuevo ataque está estrechamente vinculado a los planes de la burguesía de expulsar a los hijos de los trabajadores de la universidad. La imposición del Plan Bolonia ha confirmado nuestros pronósticos: aumento de tasas universitarias de hasta un 30%, reducción del presupuesto de las universidades públicas e imposibilidad para combinar estudios y trabajo. Ahora, el gobierno quiere incrementar aún más las tasas universitarias (como en Italia, Irlanda o Gran Bretaña), reducir el número de plazas e incluso cerrar universidades (la mal llamada "fusión de universidades").

El Sindicato de Estudiantes se ha opuesto enérgicamente al endurecimiento de la selectividad, así como a la imposición de dicha prueba a los estudiantes de CFGS. Pero para resolver la cuestión del acceso a la universidad sin caer en el cualquier enfrentamiento entre estudiantes de Bachillerato y de Formación Profesional motivada por la escasez de plazas, es necesario defender un aumento drástico del número de plazas universitarias y la supresión de la selectividad.

Desde el punto de vista de los grandes empresarios y banqueros, y del gobierno que se ha sometido a sus intereses, sobran licenciados puesto que el futuro que nos preparan es de paro y precariedad laboral. Pero no es cierto que sobren plazas o licencia-

dos: faltan profesores en todos los tramos educativos, faltan trabajadores sociales y psicólogos, falta personal sanitario para acabar con el déficit de la sanidad y las listas de espera... Por esta razón, defendemos el acceso directo a la universidad habiendo aprobado bachillerato o FP superior, y la construcción de 250.000 plazas en la universidad pública para hacer esto posible.

Contra los recortes sociales: que la crisis la paguen los capitalistas

En endurecimiento de la selectividad forma parte de los salvajes planes de ajuste que está aplicando el gobierno para que la crisis capitalista la paguen la clase obrera y la juventud. Este curso ha habido más de 50.000 estudiantes no admitidos en la Formación Profesional a nivel estatal, decenas de miles de estudiantes estudian en barracones, y aumenta la masificación de las aulas por los recientes recortes de plantilla. Todas estas medidas van directamente contra la calidad de la educación pública, a la vez que favorecen a la educación privada concertada, que se beneficia de la falta de plazas (especialmente en FP y educación infantil) y la degradación de la escuela pública.

A los recortes sociales aplicados hasta ahora, se suma la reforma laboral aprobada en septiembre de 2010 (que abarata y facilita el despido) y el retraso de la edad de jubilación a 67 años y el recorte en pensiones, que el gobierno ha aprobado en enero, con el escandaloso beneplácito de los dirigentes sindicales de CCOO y UGT.

Dicen que no hay dinero, y que los planes de ajuste son indispensables para evitar que la crisis económica se profundice. Esto también es falso. Sí hay dinero, y lo tienen los banqueros y grandes empresarios. A los 150.000 millones de euros que el gobierno de Zapatero ha regalado a la banca en los últimos dos años, se suma un nuevo plan de ayuda a las cajas de ahorro de alrededor de 20.000 millones de euros más. Todo este dinero público debería ir a prestaciones por desempleo, educación, sanidad y pensiones; y no para garantizar los beneficios de un puñado de multimillonarios.

EN DEFENSA DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES

Ante la falta de plazas en FP y la imposición de la selectividad para los estudiantes de FP:

- Ningún estudiante no admitido en la FP pública.
- Aumento de las plazas en FP de grado medio y superior hasta cubrir la demanda existente.
- Eliminación de la selectividad para estudiantes titulados en CFGS.
- Acceso directo habiendo superado la nota de corte.

Ante el endurecimiento de la selectividad a los estudiantes de Bachillerato y la imposición a los de FP:

- No al endurecimiento de la selectividad.
- Ningún estudiante de bachillerato o de FP sin plaza universitaria pública.
- Supresión de la selectividad y acceso a la universidad en primera opción habiendo aprobado bachiller o CFGS.

Para lograr estos objetivos el SE defiende:

- En lugar de entregar 20.000 millones de euros a las Cajas de Ahorros:
 - El 7% del PIB a la educación pública.
 - Plan de choque de 8.400 millones de euros para garantizar una universidad pública de calidad, con el que construir las 250.000 plazas universitarias necesarias para eliminar la selectividad.

Un vídeo prueba la brutalidad policial El Sindicato de Estudiantes continúa la campaña contra las redadas racistas y la represión policial

El pasado mes de octubre, el secretario general del Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado, fue detenido en una redada racista al interesarse por el estado de una de las mujeres que estaba siendo brutalmente golpeada por la policía. Para justificar la retención durante 39 horas de nuestro compañero, la policía le acusó a él y a los otros seis detenidos (miembros de una misma familia) de haber agredido a los agentes y entablado una auténtica batalla campal contra éstos. Desde el primer momento los siete detenidos negaron esta versión de los hechos y explicaron que su

detención tenía como único detonante el ser de origen latino.

Durante el mes de febrero el Sindicato de Estudiantes hará público el vídeo que grabó un vecino con su teléfono móvil, y donde queda demostrado que la versión facilitada por la policía no tiene nada que ver con la realidad, a la vez que se ve el comportamiento brutal que tuvieron que padecer los jóvenes y trabajadores detenidos en esta lamentable intervención policial.

Sigue toda la información en:
www.sindicatodeestudiantes.net

¡NO A LAS REDADAS RACISTAS!

Cada vez es más habitual ver en nuestros barrios un acto sistemático contra los inmigrantes por parte de la policía. El 3 de octubre se produjo un nuevo episodio en el barrio de Carabanchel (Madrid). Policiales que hacen allí su ronda la emprendieron a golpes contra una familia de inmigrantes que se disponían a entrar en su casa. Finalmente, seis de ellos fueron detenidos durante 39 horas. Sin delitos, sin de origen latino.

Los gritos de alegría de uno de los apremiados hicieron que varios vecinos se acercaran a socorrerlos. Uno de ellos fue el secretario general del Sindicato de Estudiantes. Al acercarse a hablar con la cámara del móvil, con la intención de que quedara los hechos contra la policía, otro policía le dio un golpe en la cabeza. Los rasguños de nuestro compañero demostraron su detención. La confusión con un inmigrante más y lo trataron de la misma manera.

Durante y después de las 39 horas que duró la detención, nuestro compañero fue amenazado de muerte, golpeado e intimidado. Además escuchó los insultos racistas contra varios inmigrantes en diferentes calabozos por una parte de los policías.

Ante estos hechos exigimos:

1. La expulsión del cuerpo de policía de los implicados en el suceso, amenazas e intimidación que sufrieron los 7 detenidos.
2. Retirada de todos los cuerpos para los detenidos en esta actuación arbitraria, salvaje y de corte racista.

Sindicato de Estudiantes

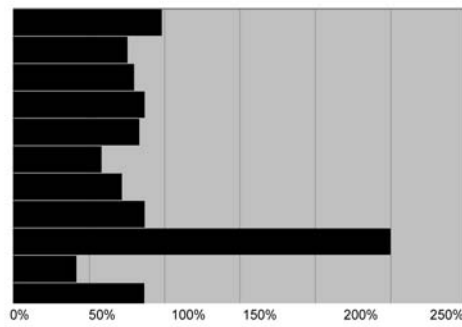
¡NATIVA O EXTRANJERA, LA MISMA CLASE OBRERA!

Ver también en
www.sindicatodeestudiantes.net:
'Ley de Economía Sostenible: más ataques a la FP y a la educación pública'

FONDO DE LUCHA

Fondo de Lucha 2010

Zona	Objetivo Anual	Conseguido	%
Andalucía Or.	35.837	35.005	98%
Andalucía Occ.	7.393	5.529	75%
Asturias	9.772	7.739	79%
Catalunya	23.142	19.960	86%
Euskal Herria	26.605	22.000	82,7%
Galiza	13.626	7.846	58%
Guadalajara	9.617	6.844	71%
Madrid	44.720	38.540	86,2%
P. València	6.004	14.978	249%
Otras	14.784	6.047	41%
Total	191.500	164.488	86%



Logrado el 86% del objetivo de 2010 2011: 164.000 euros para seguir extendiendo las ideas del marxismo

El comienzo del año 2011 ha estado lleno de acontecimientos de gran importancia a escala internacional. Fundamentalmente, los procesos en Túnez y Egipto están resultando ser enormemente contagiosos para la clase trabajadora de los países vecinos, que está saliendo a la calle para luchar por cambiar las cosas de una vez por todas.

Desde EL MILITANTE venimos analizando desde hace mucho tiempo la nueva época en la que nos adentramos. El contexto de crisis internacional del capitalismo no ha hecho más que poner de una forma más clara ante los ojos de millones de trabajadores que este sistema es un callejón sin salida para nuestra clase. Es por esto que el levantamiento de las masas en Túnez o Egipto no nos pilla por sorpresa sino todo lo contrario. También hemos tenido buenas muestras de lo que se está gestando en Europa con

explosiones como las de Grecia, Francia o la juventud en Reino Unido y sabemos que el Estado español también vivirá acontecimientos extraordinarios en los que la clase obrera luchará por tomar su destino con sus propias manos.

Esta perspectiva es la que nos lleva a batallar por conseguir los medios económicos que desde hace muchos años nos han permitido intervenir en el movimiento obrero con las ideas del marxismo y ganar cada vez a más jóvenes y trabajadores. La independencia económica es una condición indispensable para poder explicar nuestro programa en los diferentes conflictos en los que hemos estado presentes y no depender de nadie a la hora de defender los intereses de nuestra clase. La situación de crisis económica pone a la luz de una forma muy cruda que la lucha es la única alternativa y por eso, gra-

cias al sacrificio militante de todos los compañeros, hemos logrado cumplir con el 86% del objetivo, 164.000 euros, que servirán para poder seguir luchando y dando pasos adelante en los próximos meses.

Desde el anterior número hemos recibido las siguientes aportaciones:

- Andalucía Or.: 346 €
- Andalucía Occ.: 35 €
- Asturias: 1.026 €
- Catalunya: 1.425 €
- Euskal Herria: 3.872 €
- Galiza: 175 €
- Guadalajara: 1.877 €
- Madrid: 1.630 €
- P. València: 142 €
- Otras: 183 €
- **TOTAL: 10.711 €**



La Fundación Federico Engels, en la XX Feria Internacional del Libro de La Habana

De los días 10 al 20 de febrero la Fundación estará presente, por séptima vez, en la Feria Internacional del Libro de La Habana, con el mayor catálogo de libros marxistas en castellano y con sus últimas novedades; en esta ocasión, presentando en un acto público *Mi vida* de León Trotsky y *Revolución socialista y guerra civil* de Juan Ignacio Ramos.

Nuevo número de **Marxismo Hoy**, revista de la Fundación Federico Engels

La mayor crisis de la economía capitalista desde el crack de 1929 recorre el mundo. Desde el verano de 2007, el conjunto de la economía mundial ha rodado abruptamente hacia una recesión simultánea en todas las grandes potencias, que ha puesto en entredicho los fundamentos del sistema y una gran cantidad de los axiomas ideológicos de la clase dominante.

La crisis es una amenaza directa contra los trabajadores y sus familias, una amenaza que exige de una respuesta contundente y una bandera política si queremos preservar todos los avances del periodo anterior y acabar con la actual pesadilla

que se cierne sobre la humanidad. Tanto la reacción del movimiento obrero en Europa, con una escalada de la lucha de clases y la organización de huelgas generales y movilizaciones de masas en numerosos países, como el movimiento revolucionario que recorre los países árabes, son una buena prueba de los años turbulentos que nos aguardan.

También las relaciones internacionales están sufriendo una poderosa transformación, con el incremento de las tensiones derivadas de la crisis y de la lucha por la hegemonía mundial.

Estos aspectos son abordados en profundidad en este nue-



vo número de *Marxismo Hoy*, con el que pretendemos ofrecer una panorámica lo más completa posible de los aspectos más destacados de la crisis y, por encima de todo, de sus repercusiones en la lucha de clases mundial.



CRITICA DE CINE

También la lluvia

Beatriz García

“Hispaniola es un milagro. Montañas y colinas, llanuras y pasturas, son tan fértiles como hermosas (...) los puertos naturales son increíblemente buenos y hay muchos ríos anchos, la mayoría de los cuales contienen oro (...) Hay muchas especias, y nueve grandes minas de oro y otros metales”, tal era uno de los informes que Colón remitía a la Corte de Madrid, explicando que había llegado a Asia (en realidad se refería a Cuba) y a una isla de la costa china (Hispaniola que es la isla que hoy se compone de Haití y República Dominicana). Al final del informe prometía, a cambio de ayuda de la Corona, “cuanto oro necesitasen (...) y cuantos esclavos pidiesen”. Pero las cosas no eran exactamente así.

Colón estaba desesperado por encontrar las fuentes del oro del que sólo había visto polvos en los ríos y algunas máscaras a los indígenas. “Por ello en la provincia de Cicao, en Haití, donde él y sus hombres imaginaban la existencia de enormes yacimientos de oro, ordenaron que todos los mayores de catorce años recogieran cierta cantidad de oro cada tres meses. Cuando se la traían, les daban un colgante de cobre para que lo llevaran al cuello. A los indígenas que encontraban sin colgante de cobre, les cortaban las manos y se desangraban hasta la muerte. Los indígenas tenían una tarea imposible. El único oro que había en la zona era el polvo acumulado en los riachuelos. Así que huieron, siendo cazados por perros y asesinados”. Así relata Howard Zinn (historiador y activista militante norteamericano, recientemente fallecido) la colonización española en su maravilloso libro *La otra historia de los Estados Unidos*, y estos hechos y estas palabras inspiran algunas de las escenas más impactantes de la última película de Icíar Bollaín, que comienza con la dedicatoria de la misma al propio Howard Zinn, anticipando así el carácter crítico del largometraje.

El punto de partida es la historia de un equipo de cine que viaja a Bolivia para grabar una película sobre la colonización española con la que pretenden denunciar, tomando como referencia la vida y obra de Bartolomé de las Casas, la violencia ejercida por los colonizadores hacia los indígenas.

Explotación imperialista, ayer y hoy

Se trata de tres historias, que se construyen una sobre otra. A la par que comienza el proceso de grabación de las escenas, selección de extras, etc. por el equipo de cine, y que comienza a retratarse la masacre indígena tras el descubrimiento de América, otra historia, esta vez contemporánea, aparece: la lucha victoriosa contra la privatización del agua en Cochabamba, Bolivia, en el año 2000, conocida como la “guerra del agua”. Estas dos últimas historias, comparten personajes y protagonistas, confundiendo, en la obra de Bollaín, en un mismo relato sobre la explotación de los recursos naturales y de los pueblos de los países donde se encuentran; entonces la Corona Española y ahora las compañías multinacionales (en 2000 la compañía americana Bechtel estaba detrás del intento fallido de privatización del agua de Bolivia), también es un relato sobre la lucha, de los indígenas entonces y de las masas bolivianas en 2000.

Más allá de los personajes y las actuaciones de un buen reparto de actores, la verdadera protagonista de la película es esta analogía, que también sirve para retratar distintas actitudes ante los hechos. Así, los distintos personajes, que se van mostrando en evolución, se convierten en vehículos para retratar las distintas posiciones frente a la realidad de esta explotación, tanto la colombina como la actual, y también de la lucha de un pueblo. Éste es otro aspecto a destacar de *También la lluvia*, pues no se muestra complaciente con la simple denuncia, sino que desvela la esterilidad de algunas críticas en la distancia, en este caso a través de un director de cine comprometido con desvelar la brutalidad colonizadora de los siglos XV y XVI, pero más reacto al compromiso con la lucha actual de un pueblo por el derecho al agua, o la superficialidad del cinismo de otros personajes cuando estos chocan con la realidad de una lucha a vida o muerte por el futuro de millones de familias. Explorando estas contradicciones la película va tomando una dimensión más amplia y más rica. Un buen homenaje a Howard Zinn, pero sobre todo a las masas bolivianas que el año 2000 se atrevieron a desafiar a los colonizadores contemporáneos, y, además, ganaron.



La Junta de Andalucía vende parte de sus acciones en SADIEL

¡Ni despidos ni recortes en nuestras condiciones laborales!

Sección Sindical de CCOO* en SDS

El viernes 21 de enero se hizo oficial la venta de acciones de Sadiel —empresa dedicada a la gestión informática cuya sede principal está en Sevilla— por parte de la Junta de Andalucía y otros accionistas. Se firmó un principio de acuerdo por el cual el gobierno andaluz venderá un 15,5% de sus acciones, quedando su participación reducida al 22%.

El modelo de negocio de Sadiel se basa en parte en la realización de software a precios bajos a través de su filial SDS en Puerto de Santa María, maximizándose así los beneficios percibidos por el trabajo. Entre los planes de Sadiel figura desde hace tiempo lo que los empresarios llaman externalización, es decir, abrir la puerta a que el trabajo que hoy día hacemos aquí se haga en otros países con salarios más baratos y donde los derechos laborales apenas existen. De realizarse esta perspectiva, significaría destrucción de empleo y el incremento de la precariedad laboral en nuestra empresa, circunstancia que pondría en dificultades a la Junta de Andalucía, al tratarse de una empresa con importante participación pública. A través de esta venta de acciones estos planes pretenden ser llevados a cabo sin dar tantas explicaciones, puesto que estaremos ante una empresa prácticamente privada o con escasa participación pública. Aquí es

donde entra en juego Ayesa, el nuevo grupo empresarial de negocio internacional que se hará con el 51% de las acciones.

El grupo Sadiel es rentable

Esta venta de acciones poco tiene que ver con la crisis. Los empresarios llevan muchos años, incluidos los que había crecimiento económico, deslocalizando el trabajo a países en vías de desarrollo con el fin de aumentar aún más sus ganancias. El caso de Sadiel es paradigmático, puesto que es una empresa poco o nada afectada por las crisis (en 2009 logró una cifra de negocios de 100 millones de euros, aumentando la del año anterior). No se trata de sortear problemas económicos, porque el grupo Sadiel es más que rentable, se trata de la ambición de ganar aún más, sin importar las personas a las que se pueda dejar en el paro.

Los accionistas, entre ellos la Junta de Andalucía, malvenden Sadiel, valorando la

empresa en 35 millones de euros. Ayesa pagará alrededor de 18 millones por hacerse con el control de la mayoría de las acciones, de los cuales sólo unos pocos revertirán en la Junta de Andalucía. No podemos tolerar que una empresa financiada con dinero público se privatice para los réditos e intereses particulares, máxime cuando uno de los objetivos de abrir SDS era la reindustrialización de la Bahía tras el conflicto de Delphi y para lo cual se desembolsó una gran cantidad de dinero público en subvenciones. No podemos permitir que se vuelva a repetir esta injusticia y que el duro trabajo que hacemos aquí nos sea arrebatado para engordar los bolsillos de empresas privadas.

Los comités de empresa de SDS y Sadiel contra la venta de acciones

Los comités de empresa de Sadiel y SDS, aunque todo el proceso de venta se realiza a espaldas de éstos, ya advirtieron de la venta de acciones y se posicionaron contra ella. La asamblea de trabajadores de SDS ratificó la postura de su comité y así se le trató de hacer llegar al consejero de Innovación de la Junta de Andalucía, pero éste ha preferido sentarse largo y tendido con los empresarios, en lugar de sentarse a escuchar a los trabajadores que votan y a los que, en teoría, representa en el gobierno andaluz. Por su parte, la empresa negó siempre cualquier noticia sobre la venta de acciones, tachando de “sarta de mentiras” la información

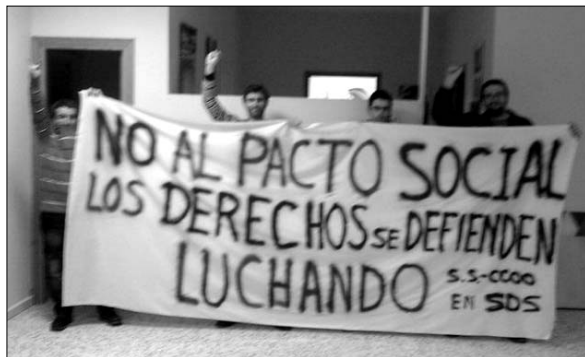
que los comités proporcionaron a los trabajadores.

El dueño de Ayesa, José Luis Manzanares Japón, ha tratado de convencer a los trabajadores de Sadiel y SDS de que la venta es buena para la empresa. De eso no tenemos duda. Pero que no se empeñen en convencernos de que lo que es bueno para los empresarios es bueno para los trabajadores. Así lo demuestran sus declaraciones a Europa Press el 04/03/2010 en las que deja claro su visión sobre los derechos de los trabajadores: “...alguien tiene que decirle a la gente que no es un país rico, sino pobre y si es algo es gracias al trabajo de su gente y se deje de pedir tantos derechos, preocupándose por sus deberes ... el trabajador debe olvidarse del ocio, que ya no es el motivo fundamental de vivir, y luchar desesperadamente como en los años 60 y 70”.

Por todo ello, nos posicionamos firmemente en contra de la venta de acciones y haremos todo lo que esté en nuestra mano para tratar de evitarla. Para ello contamos con el pronunciamiento y apoyo de la dirección de nuestras organizaciones sindicales que, en el caso de CCOO, se ha posicionado ya en contra de la venta. Si finalmente la venta se realiza, estamos firmemente determinados a movilizarnos para que se garanticen por escrito los derechos laborales y el empleo de las plantillas de SDS y Sadiel, de manera que los movimientos especulativos de los empresarios no afecten nuestra estabilidad laboral, nuestros salarios y nuestros derechos.

El que de esta lucha salgamos reforzados, impidiendo cualquier retroceso en nuestros derechos depende de la unidad y del trabajo conjunto de todos y cada uno de los trabajadores de Sadiel y SDS. Es necesario dar un paso al frente y ponernos en marcha para demostrar nuestra determinación en la defensa de nuestros derechos.

* CCOO cuenta con dos tercios de la representación en el Comité de Empresa



Compañeros de la sección sindical de CCOO de SDS-Cádiz

Vicent Rodrigo
Delegado de CCOO en AENA-NA,
Aeropuerto de Manises (Valencia)

La privatización de AENA deteriora la seguridad y las condiciones laborales

Desde que se inició la privatización de Aeropuertos Españoles Navegación Aérea (AENA) el pasado 5 de febrero, con el RD-ley 1/2010, los incidentes aéreos han aumentado un 95% y los catalogados como tipo A, cuasi-colisión, se han dado hasta en siete ocasiones. El motivo de esta barbaridad ha sido permitir que los burócratas puedan tomar decisiones operativas del tráfico aéreo. Así, el 6 de febrero de 2010 en Barajas, tras continuos cambios de pista, se provocaron congestiones en el aire, retrasos y desvíos a otros aeropuertos; también el 9 de marzo en Girona, con hasta 15 centímetros de nieve en la pista, se permitió el aterrizaje de los aviones cuando la normativa de seguridad dice que hay que cerrarlo cuando se llega a los cinco centímetros.

Estos incidentes, derivados del ataque a los controladores, son sólo el comienzo de los problemas que se van a dar en la seguridad. Cuando en junio se publicó otro decreto para privatizar el mantenimiento de la Navegación Aérea, el gobierno dio un paso adelante hacia la inseguridad aérea. El trabajo de mantenimiento es indispensable para el correcto funcionamiento de los radares o el sistema de comunicaciones, siendo este último imprescindible para las comunicaciones entre los controladores y los pilotos.

Según el Ministerio de Fomento, empresas como Saerco, Ferrosfer, ACS o Grupo FCC están perfectamente preparadas

para hacerse cargo de las 13 torres de control puestas a la venta. No es de extrañar que estas grandes constructoras, que nos empujaron hacia la crisis ahora pretendan quedarse con un servicio público clave para la economía del país. Que se mercedee con el transporte aéreo y sean constructoras las que se sitúen en cabeza es, como poco, insultante y temerario. En este sentido no hace falta recordar el grave accidente ocurrido en Barajas en 2008.

Por último, desde el 1 de diciembre, se abrió la veda con los aeropuertos (zona tierra), y a falta de pocos días para la constitución de “Aena Aeropuertos SA”, prevista para el 28 de febrero, el proceso privatizador abierto en diversos frentes, va viento en popa. Esta última fase afectará directamente a los trabajos en la Central Eléctrica, que alimenta todas las instalaciones del aeropuerto (torres, centros de control, luces de pista, terminal...), a los servicios de bomberos y a otros trabajos muy especializados.

Los dirigentes de la CSE tienen que rectificar su política sindical

Ante todo esto, la representación sindical de AENA, constituida en la Coordinadora Sindical Estatal (CSE) en la que participan CCOO, UGT y USO, no llevó a cabo el plan de lucha que anunció el 2 de diciembre para luchar contra la privatización. En lugar de esto se centró en dialogar con el gobierno para negociar la transcripción del actual V Convenio Colectivo a uno nuevo

para el futuro grupo de empresas que se va a constituir. Finalmente, los dirigentes sindicales de AENA han firmado un acuerdo, que según ellos, garantiza un convenio único para todo el Grupo AENA y que en la práctica asume la privatización. Es lógico pensar que cuando esté privatizada AENA, sus dueños emprenderán ataques y el gobierno mirará hacia otro lado. Lo que la CSE ha hecho en la práctica es encojerse ante el decreto de estado de alarma y aceptar la derrota antes de que empezara la lucha.

La Coordinadora confundió a los trabajadores diciendo una cosa en diciembre y haciendo otra distinta en las semanas posteriores, incitándonos contra la privatización y derrochando esfuerzos en prepararse legalmente para aceptar la misma. Esta actitud contradictoria ha sido justificada diciendo que “la situación es dramática”, como si los trabajadores no tuviéramos ojos para ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor: banqueros brindando con M&C Chandon sus aumentos salariales, los grandes empresarios repartiéndose nuestro patrimonio público, los políticos vestidos con trajes de 6.000 euros tergiversando la verdad, y los trabajadores recibiendo a cambio recortes, despidos y desahucios. Desde luego que esta situación es dramática, y más dramática que se volverá si no se rectifica la política sindical.

La política sindical de despacho durante años de expansión capitalista ha creado un mal hábito en nuestros dirigentes sindicales. A la vez, el gobierno intenta usar to-

dos los medios para hacer copartícipes de todos los ataques a los dirigentes sindicales, tratando de restarles credibilidad ante las bases y de esta manera debilitar al movimiento obrero. Por eso es decisivo recuperar un sindicalismo combativo y democrático. Perder el tiempo en “encuentros digitales” con el presidente de AENA es entrar en su juego dilatorio y de desprecio, es perder un tiempo valioso y mucha autoridad ante las bases. Lo mismo ocurre con las reuniones mantenidas con las diversas fuerzas políticas con el objeto de “dar la cara” y elevar la discusión al parlamento.

La CSE debe dejar de distraerse con los títeres de quienes nos roban y a la vez basarse en el buen ánimo y disposición a la lucha de los trabajadores, que se demostró en las manifestaciones del 20 de enero en Madrid y Barcelona. Los dirigentes sindicales de AENA tienen que dar la cara, desplazarse a los diversos aeropuertos para explicar en asamblea lo que han firmado, ¿quién ha decidido la firma de este acuerdo?, y escuchar a los trabajadores, para sentir su fuerza y comprender que no somos ovejas. Los afiliados a los sindicatos y los trabajadores que estamos soportando estos ataques tenemos que exigir la ruptura inmediata de este acuerdo lesivo para nuestros intereses, y el conjunto de los usuarios, y la organización de una lucha masiva, seria y coordinada a nivel estatal para frenar la privatización. Llamamos a la base de los sindicatos de clase a dar la batalla por recuperar un sindicalismo combativo y democrático.

Mónica Iglesias

Desde hace varias semanas los trabajadores de Alas Aluminium vienen realizando movilizaciones en defensa de sus puestos de trabajo, amenazados por los malos resultados de la compañía, que acumula 70 millones de euros de pérdidas, después de haber recibido 13,5 millones de subvenciones.

La historia de Alas Aluminium, surgida en 2005, coincide en lo esencial con la de una mayoría de empresas creadas en los últimos años con fondos mineros: se anuncia a bombo y platillo la creación de una empresa, que será la "alternativa" a la desindustrialización crónica que sufren las comarcas mineras, financiada en su mayor parte con dinero público, y que recibe millones en subvenciones. Pasado cierto tiempo, normalmente el necesario para no tener que devolver las ayudas, la empresa anuncia pérdidas y echa el cierre.

Alas Aluminium está participada por un 51% de capital público a través de diversas entidades del Principado de Asturias (Sadim, Sodoco y la Sociedad Regional de Promoción) y pese a esto "nadie" detectó ni remotamente las malas prácticas empresariales que han terminado abocando a la empresa a la ruina. Algo incomprensible teniendo en cuenta que ya en el 2009 una trabajadora fue despedida por denunciar en reiteradas ocasiones las prácticas de la dirección de la empresa. Tras su despido, reconocido como impropio por la propia empresa, la plantilla llevó a cabo una huelga de solidaridad con ella. En un artículo escrito recientemente en el diario regional *La Nueva España* esta trabajadora da las claves de la actual situación: "...la falta de una contabilidad de costes rigurosa, los precios marcados al azar, la desorganización de la fábrica (...) camiones devueltos por lo desastroso de su contenido desde cualquier punto del mundo, en los que perdías el transporte (en algún caso facturado por alguien de la casa), la materia prima y la fabricación y, encima, no cobrabas la factura. Ventas de comerciales (...) sin criterio alguno para fijar

Alas Aluminium (Asturias) ¡Frente al robo empresarial, nacionalización bajo control obrero!

precios y plazos, volviendo loca la planificación de la fábrica, ventas de las cuales, incluido el Director Comercial, independientemente de si se cubrían costes o no, cobraban su comisión. Luego, cuando todo acaba, se declara en quiebra la empresa y a casa con los bolsillos llenos. Estas son, entre otras muchas cosas, las que han llevado al abismo a Alas Aluminium".

Y efectivamente, la empresa pretende ahora irse de rositas y dejar en la calle a una plantilla de 270 trabajadores. Como primera medida para "solucionar" la situación económica, la dirección de Alas Aluminium presentó un primer plan para despedir a casi la mitad de la plantilla (135 trabajadores), un ERE temporal para el resto (sería el tercero, y durante la vigencia del último la empresa perdió, incomprensiblemente, otros diez millones de euros) y supeditar entre un 5% y un 20% del salario a la productividad.

Ante el rechazo de la plantilla, la dirección presenta una nueva propuesta: un ERE temporal para todos los trabajadores durante cuatro meses. De nuevo esto es rechazado, ya que el ERE no va vinculado a ningún plan de futuro, con lo cual esta medida es sólo un parche para ganar tiempo y a su finalización se pondrán los despidos nuevamente encima de la mesa.

El consejero de Trabajo se posiciona con la empresa

Pero al consejero de Trabajo, Graciano Torres, estas medidas, incluyendo los 135 despidos, le parecen normales y las respalda. "Se está intentando sacar a la empresa adelante" lo que a veces "trae consigo que se tomen medidas desagradables". Conociendo ahora las declaraciones de la trabajadora

despedida, este comentario resulta aún más indignante, pues el relato muestra la absoluta impunidad con que los empresarios obtuvieron sus beneficios y el nulo interés que tienen por "sacar a la empresa adelante".

¿Cómo es posible que "la parte pública" no conociera esta situación si se denunció en varias asambleas de trabajadores? ¿Qué tipo de control se ejerce sobre las empresas subvencionadas? ¿De qué sirve que el 51% del capital sea público? Pues escuchando las declaraciones del consejero, parece que de nada. O mejor dicho, para regalarles el dinero público a los "honrados" empresarios que crean riqueza... para sus bolsillos, claro.

Esta descarada "toma de partido" del consejero a favor de la empresa contrasta con la actitud que mantiene ante los trabajadores, rechazando de plano la petición del comité de empresa para una posible ampliación de capital por parte de las entidades públicas. Según Graciano Torres, el gobierno "no tiene vocación de nacionalizar empresas", una de sus frases favoritas y que parece que suelta a la primera ocasión, como ya tuvieron que oír en su día los trabajadores de otra empresa que ha corrido la misma suerte que ahora parece esperar a Alas Aluminium: Venturo XXI.

Desde el principio, la reacción de los trabajadores de Alas Aluminium ha sido luchar contra el cierre de la empresa de una forma decidida. Lamentablemente, desde las direcciones sindicales se lanza el mensaje, tantas veces escuchado, de que es necesario "tener calma" y no "armar mucho alboroto" para no asustar a los "posibles inversores privados interesados en la empresa". Si no estuviera en juego el futuro de casi 300 familias, casi darían ganas de reírse.

¿Qué inversores privados? ¿Los que acudieron al rescate de Autotex, de Menasa, de Vesuvius, de Venturo XXI?

No. La experiencia ha demostrado docenas de veces que eso sólo son cantos de sirena que paralizan la respuesta de los trabajadores, desgastando la lucha y creando desmoralización. La solución para Alas Aluminium no está en ese socio francés que probablemente no exista y, que si existe exigirá la aplicación de un plan que contemple nuevos despidos y más ataques a la plantilla. La solución está, mal que le pese a Graciano Torres, en la nacionalización de una empresa que ya tiene más de la mitad de su capital público, y que debe implantar el control democrático de los trabajadores en la producción para evitar situaciones como las que ha padecido hasta el momento.

Para luchar por esto, es necesario incrementar la movilización, unificando esta lucha con el resto de empresas en conflicto, como Venturo o Duro Felguera. Defender el empleo de forma conjunta es la mejor manera de mostrar la verdadera fuerza de los trabajadores y de obligar al gobierno a cambiar su desastrosa política económica. La experiencia demuestra que la lucha empresa a empresa no es suficiente. Hay que pasar a la ofensiva defendiendo un programa que sirva a los intereses de los trabajadores.

**¡Investigar y castigar las prácticas empresariales fraudulentas!
¡Que los empresarios respondan con su patrimonio de las deudas que han provocado!
¡Control obrero de la producción y nacionalización de las empresas en crisis!**

Sección Sindical de CGT en EMTE Service

El pasado 1 de febrero tuvo lugar en el Juzgado de lo Social nº 20 de Barcelona el juicio contra el despido del delegado de CGT en EMTE Service, Manu Vidal.

Como venimos informando en las páginas de EL MILITANTE, Manu es un sindicalista que lleva más de 16 años luchando por los derechos de los trabajadores, que fue despedido por la empresa dos días antes de la huelga general del 29-S con el objetivo de acabar con el sindicalismo de lucha y reivindicación que representa el compañero. Este despido forma parte de una larga historia de acoso contra Manu y otros compañeros del sindicato, que hace dos años sufrieron por parte de EMTE la mayor represión desatada en las últimas décadas hacia el movimiento sindical en Tarragona, con el despido de Juanma Carrillo, y duras sanciones de empleo y sueldo contra Manu y otro compañero, Ismael Pérez. Tras la lucha desarrollada en aquel momento, la empresa fue obligada por dos sentencias judiciales a readmitir a Carrillo y retirar las sanciones contra Manu e Isma. Sin embargo, la empresa no ha cesado ni un momento en su plan de acabar con el sindicalismo de lucha que representa Manu y la CGT en EMTE Service, y por eso ha vuelto a la carga, despidiendo a Manu y utilizando su ejemplo para atemorizar a la plantilla. La patronal quiere el camino libre para que el único derecho que tengamos los trabajadores sea el de callar, y que pueda recortar derechos, incumplir el convenio y realizar despidos tan injustos, como el de un trabajador con contrato fijo que tenía que acompañar

Celebrado el juicio por el despido de Manu Vidal, delegado de CGT en EMTE

La motivación represiva de la empresa queda en evidencia



a su hijo con cáncer al hospital, y que motivó, entre otros atropellos, la lucha de los compañeros por su readmisión y dos jornadas de huelga en la empresa.

Cincuenta delegados, trabajadores y jóvenes muestran su solidaridad durante el juicio

Al acto del juicio Manu acudió arropado por unos 50 delegados sindicales, trabajadores y jóvenes del Sindicat d'Estudiants que quisieron mostrar el apoyo al compañero y evidenciar su rechazo a la persecución sindical desatada contra él. Entre los pre-

sentes estaba Diego Rejón, del Metal de CGT; Aniol Santo, secretario general del Sindicat d'Estudiants de Catalunya; Lluís Perarnau, delegado de UGT en la UAB; José María Pubill, delegado de Actub en TMB de Barcelona; Gabriel Jiménez, delegado de CCOO en el Restaurante Tropical de Gavá, y varios compañeros de los comités de empresa de EMMSA, COTINSA, Kellogs, INSS, etc., entre otros compañeros trabajadores y estudiantes de Tarragona y Barcelona. Delante del edificio de los juzgados se realizó una concentración como continuidad de la del pasado 2 de diciembre en Tarragona, que tuvo el apoyo de todos los sin-

dicatos de clase, y contó con la presencia entre otros de los secretarios generales en Tarragona de CGT, CCOO, UGT, COBAS, USTEC y Sindicat d'Estudiants.

Durante el desarrollo del juicio quedó en clara evidencia que el despido de Manu fue antisindical, por su firme defensa de los derechos de los trabajadores y que no hubo ni una sola causa objetiva que justificase la acción de la empresa. Ésta se vio obligada a reconocer, ante las pruebas presentadas, que Manu no estaba asignado al centro de trabajo extinguido y que viene desarrollando desde hace años una labor reivindicativa.

A la espera de la sentencia, desde la CGT de EMTE agradecemos todas las muestras de solidaridad, mails de apoyo y aportaciones económicas recibidas para seguir difundiendo lo ocurrido, y esperamos como dijo Manu: "que esta lucha sea el ejemplo de una victoria obrera, que sirva de referencia para todas las empresas".

**¡Basta de ataques a los trabajadores!
¡No más recorte de derechos ni abusos laborales!
¡Por un sindicalismo democrático y combativo que defienda realmente a los trabajadores!
¡Uno a uno nos pueden, unidos no!**

Sentencia declara ilegal la huelga de Metro de Madrid

Un precedente gravísimo al que hay que responder

Víctor Taibo

Una sentencia del Juzgado de lo Social número 16 de Madrid ha declarado ilegal la huelga de los trabajadores de Metro de Madrid del pasado verano. Inmediatamente, Esperanza Aguirre salía a los medios de comunicación para explicar que esta sentencia supone “un antes y un después” ya que “es la primera vez en la historia de la democracia que una institución pública impugna una huelga como ilegal y abusiva, y la primera vez que la justicia le da la razón”, concluyendo que “nunca más habrá una huelga que no respete los servicios mínimos”.

Una sentencia ejemplarizante para amedrentar al conjunto de la clase obrera

Al día siguiente de conocerse la sentencia el diario de negocios *Expansión* publicaba un editorial muy significativo del valor que tiene para la patronal. Bajo el titular “Ejemplarizante sentencia en la huelga de Metro”, el diario explicaba que “sienta un gran precedente para evitar que en el futuro los convocantes de paros hagan caso omiso de los servicios mínimos y lleven a cabo intolerables huelgas salvajes”, concluyendo que “pone de manifiesto la clamorosa inexistencia de una ley de huelga (...) necesaria para que la justicia pueda actuar con carácter preventivo y evitar así que colectivos que operan en servicios públicos esenciales puedan tomar a los ciudadanos como rehenes de sus reivindicaciones”.

Queda meridianamente clara la intención de esta sentencia y el uso que va a hacerse de la misma de cara a impedir a la clase trabajadora el ejercicio del derecho de huelga, la única arma que tienen los trabajadores para defenderse de los ataques de

patrones y empresarios. De hecho, no es ninguna casualidad que el abogado de la empresa utilizara en el juicio el ejemplo de los controladores aéreos de cara a argumentar su caso, y tampoco que el ministro de Fomento utilizará en diciembre el ejemplo de la huelga de Metro durante la crisis de los controladores. Tampoco es casual que todos estos hechos se hayan producido tras las huelgas y movilizaciones que protagonizaron los trabajadores franceses durante el pasado mes de octubre, y que llevaron prácticamente a la parálisis al país ante el desabastecimiento de combustible en las gasolineras como consecuencia de la huelga total decretada en las refinerías francesas.

Por otro lado, como consecuencia de esta sentencia la Comunidad de Madrid podría reclamar daños y perjuicios por valor de hasta seis millones de euros, además de concretar sanciones contra todos aquellos que no cumplieron los servicios mínimos, incluyendo posibles despidos, con los que ya han estado amenazando desde hace varios meses a los miembros del comité de huelga.

Ninguna confianza en la justicia burguesa

La reacción de los dirigentes sindicales a esta salvaje sentencia ha sido hasta ahora interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia “esperando un resultado coherente”. El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Juan Antonio Olmos, la calificó como “una equivocación del juez”, lo que desde nuestro punto de vista es un error muy grave ya que niega la intención política que tiene y no ayuda a dar una respuesta consecuente por parte de los trabajadores.

En la misma línea, el abogado de CCOO ha considerado la sentencia como “parcial”,

ya que no se puede establecer el “incumplimiento global” de los servicios mínimos al tratarse de una suma de incumplimientos individuales. Argumentar contra la sentencia planteando que deberían individualizarse las responsabilidades resulta aún más negativo que no argumentar nada, pudiendo poner a los trabajadores ante una situación de mayor indefensión ante la maquinaria represiva de la dirección de la empresa.

Los dirigentes de CCOO y UGT de Madrid deben responder en la calle

Tras dicha sentencia los dirigentes sindicales deberían lanzar una campaña sistemática y ambiciosa de información y denuncia en todas las empresas de Madrid, contrarrestando la propaganda oficial de criminalización de los trabajadores de Metro. Hay que conseguir que se sienta este ataque como un ataque al conjunto de la clase obrera. El derecho a huelga es un instrumento vital de defensa de los trabajadores, más aún en el actual contexto de ofensiva generalizada contra nuestros derechos. Tal y como planteábamos durante la propia huelga, es vital ganar la simpatía del resto de la clase obrera conectando las propias reivindicaciones de los trabajadores del Metro con los ataques y penalidades que viene sufriendo el conjunto de los trabajadores como consecuencia de la crisis, y denunciando a los auténticos responsables de la misma, banqueros y capitalistas.

Esta campaña de información debería ir acompañada de movilizaciones en la calle. De hecho, la mejor manera de oponerse a esta sentencia sería vinculándola a una estrategia sindical de movilización general y ascendente contra los ataques tanto del gobierno de la Comunidad de Madrid como

central. Esto crearía el clima propio para, en un momento determinado, llegar a una huelga general en la Comunidad de Madrid en solidaridad con los trabajadores de Metro. Lógicamente una orientación de este tipo implicaría que los dirigentes de CCOO y UGT abandonen su actual línea de pactos y concesiones sin lucha.

No responder a este nuevo ataque en Metro tendrá graves consecuencias en el futuro, limitando la acción sindical en la empresa, e impidiendo el ejercicio del derecho de huelga a través de los servicios mínimos, un auténtico piquete patronal para impedir la efectividad del único instrumento que tienen los trabajadores para defenderse. Por ello es más necesario que nunca que CCOO y UGT de Madrid, los únicos con suficiente capacidad para ello, pongan sus estructuras a disposición de los trabajadores de Metro de cara a desarrollar una amplia campaña de propaganda en barrios, intercambiadores y centros de trabajo, realizando asambleas en estos últimos en solidaridad con los trabajadores de Metro de Madrid a través de sus delegados y comités.

La sentencia contra los trabajadores de Metro no está al margen de la ofensiva general contra los trabajadores. El hecho de que los dirigentes de CCOO y UGT los estén avalando y manteniendo un sindicalismo de paz social, supone un nuevo obstáculo en las luchas cotidianas de cada empresa, envalentonando aún más a las patronales.

Por esta razón hay que organizar en el seno de CCOO y UGT un fuerte movimiento de oposición desde abajo, desde los comités, desde los delegados sindicales, desde las secciones sindicales, dando la batalla en el seno de CCOO y UGT para desarrollar un sindicalismo de clase y combativo, basado en la movilización y en la democracia interna.

Referéndum en Nissan (Barcelona)

Para combatir el chantaje patronal se necesita un sindicalismo combativo

Jaume García

En marzo de 2009 fue Seat, ahora ha sido Nissan. El pasado 12 de enero se celebró un referéndum auspiciado por USOC y UGT, la empresa, la Generalitat y el Ministerio de Trabajo para que los trabajadores de Nissan trabajaran más, por menos dinero: congelación salarial en 2012, aumento del 0,5% en 2013 y de 1,5% en 2014; un aumento efectivo del tiempo de trabajo que aumente un 6% la productividad; 15 sábados laborables al año, 12 obligatorios y una bolsa de horas extras de 40 horas, 32 obligatorias, entre otras medidas. Eran las condiciones impuestas por la multinacional japonesa para que el nuevo modelo pick-up se fabricara en Barcelona.

Según USOC y UGT este nuevo sacrificio “garantizará el empleo”, sin embargo, también lo garantizaba el pasado Plan Industrial, firmado por CCOO, USOC y UGT y la empresa en 2009, que ya prometía entonces la implantación del nuevo modelo y que ha supuesto desde entonces más de 2.000 despidos.

Realmente, la empresa ya se había decantado por fabricar la pick-up en Barcelona en el mes de noviembre. Aunque Nissan

agitaba con la deslocalización del nuevo modelo a Sudáfrica o Marruecos, la factoría de Barcelona reunía los mejores requisitos logísticos, técnicos y profesionales para fabricar para Europa la nueva furgoneta. Sin embargo, en repetidas ocasiones los dirigentes sindicales de la factoría ya habían demostrado su “voluntad de llegar a acuerdos” y la experiencia de Seat había creado un muy mal precedente. La multinacional optó por presionar para poder dar una nueva vuelta de tuerca a los trabajadores y, además, obtener más ventajas del gobierno. Si ya Nissan conseguía suculentas subvenciones de la Generalitat (en junio de 2010 el dinero público cubría el 80% de las inversiones de Seat y Nissan), ahora el gobierno se ha comprometido a cubrir mediante créditos blandos la mitad de la inversión de 80 millones de euros que requerirá la furgoneta pick-up.

En esta ocasión la sección sindical de CCOO (mayoritarios en el comité de empresa de Zona Franca, donde se concentra la mayoría de la plantilla) se ha opuesto a lo que, correctamente, han caracterizado como “chantaje patronal”. Hay que señalar, que CCOO de Nissan ha estado sometida a muchas presiones para que se sumara al acuerdo. Por ejemplo, la Generalitat mantuvo una reunión con el secretario general de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego,

para que éste hiciera entrar en razón a la sección sindical. No obstante, la oposición de CCOO no ha sido suficiente para evitar la victoria del “sí” que ha conseguido el apoyo del 70% de la plantilla en el referéndum, con una participación muy alta (en torno al 96%).

El ‘pacto global’ dificulta la lucha en las empresas

Esta derrota de los trabajadores se debe en parte a la campaña de terror que empresa, gobierno y los dirigentes de UGT y USOC han lanzado entre los trabajadores, presentando el recorte de los derechos laborales como el “mal menor”, el único camino para evitar más despidos e incluso el cierre de la factoría. Pero también tiene mucho que ver la política sindical que ha venido desarrollando CCOO. Aunque la sección sindical en esta ocasión se opuso a los planes de la empresa, sus dirigentes desperdiciaron la oportunidad de dar continuidad a la lucha que protagonizaron los trabajadores de Nissan en otoño de 2008, que se estaba convirtiendo en un referente para los trabajadores de otras empresas afectadas por la situación de crisis. Aquellas movilizaciones habían alcanzado una tremenda fuerza pero en su punto álgido los dirigentes sindicales optaron por abandonar el camino de la lucha y acep-

tar una tras otra las imposiciones de la empresa: ERE temporal, tras ERE temporal, despidos “no traumáticos”, etcétera.

Pero además, en este contexto de crisis económica, los trabajadores son conscientes de que la lucha en una sola empresa es muy complicada. Si bien CCOO de Nissan se ha opuesto al referéndum, los dirigentes estatales del mismo sindicato han aceptado el pacto social con el gobierno y la CEOE. En caso de ganar el “no”, ¿qué garantía tenían los trabajadores de que los sindicatos habrían emprendido una lucha consecuente y hasta sus últimas consecuencias para garantizar los puestos de trabajo? Muchos trabajadores seguramente se hicieron estas preguntas y, resignados, votaron “sí”, a sabiendas de que la debilidad invita a la agresión y sin duda, la empresa volverá a incumplir los acuerdos alcanzados.

Realmente, la lucha es el único camino viable para garantizar el empleo y las condiciones laborales. Una de las supuestas competidoras de Nissan-Barcelona, la factoría de Sudáfrica, es buena prueba de ello: el principal sindicato sudafricano del metal, NUMSA, demandó un 20% de aumento medio de salario para la industria automovilística, pese a la recesión económica que vive Sudáfrica. Con el diálogo roto, el sector quedó parado por una huelga que duró ocho días en agosto de 2010 y que culminó con un aumento del salario medio en el sector del 10% para 2010 y del 9% para 2011 y 2102. Desde luego, esa lucha no ha evitado que la factoría de Sudáfrica vaya a fabricar la pick-up para toda África. Un sindicalismo de clase, combativo e internacionalista es el único camino para hacer frente a las multinacionales.

La huelga general del 27 de enero en Euskal Herria

Nagore Aguirre

La huelga general convocada en Euskal Herria por la mayoría sindical vasca, y que los marxistas de EL MILITANTE hemos apoyado activamente, ha vuelto a poner de manifiesto que la clase trabajadora tiene muy claro cuál es el camino para acabar con los graves ataques que están sufriendo nuestros derechos: la lucha.

La participación, tanto en el número de empresas que siguieron el paro como en el número de manifestantes, fue mayor que en las huelgas del 21 de mayo de 2009 y del 29 de junio de 2010, convocadas por ELA, LAB, STEE-ILAS, ESK, HIRU (y el 29 de junio también por CCOO), y también mayor que la del 29 de septiembre convocada por CCOO y UGT.

La industria para mayoritariamente

Como siempre, desde muchos sectores se ha intentado ridiculizar la participación de los trabajadores en la huelga. Pero algunos datos, dados en rueda de prensa por los sindicatos convocantes, revelan la importancia del paro: "Sobre el total de empresas, el nivel de paro total o superior al 70% alcanza a 308 empresas, lo que supone un 61,35% del total (...) Las empresas industriales que alcanzan niveles de paro parciales superiores al 30% son 75, y representan el 14,94%. La incidencia del paro ha sido residual o ha habido actividad normal en 88 empresas, que representan el 17,53% del total (...) Respecto a Nafarroa, el paro ha sido total en algunas empresas, con una incidencia muy alta en Sakana y la zona norte de la Comunidad. También en Iruñaldea y su cinturón industrial la incidencia ha sido significativa (...) A diferencia de otras ocasiones, numerosas empresas del movimiento cooperativista se han sumado también a la huelga.



(...) han sido numerosísimas las empresas de tamaño medio y pequeño que han realizado un paro total, contribuyendo así a la visualización generalizada del apoyo de trabajadores y trabajadoras a la huelga convocada. En resumen, el contraste de datos del sector industrial indica que la huelga ha contando con un gran respaldo y un seguimiento muy generalizado".

Tanto los medios de comunicación como la patronal tienen que admitir este dato, pero lo hacen infravalorándolo. Sin embargo, el paro en la industria es fundamental, ya que esta es el motor de la economía y, por tanto, una caída en la producción lleva a un impacto económico y social mucho mayor que en cualquier otro sector.

Gran seguimiento en otros sectores y manifestaciones masivas

"En el sector del transporte, han funcionado los servicios mínimos. Así en el transporte de viajeros por ferrocarril, EuskoTren, Tranvías y el Metro de Bilbao han secunda-

do mayoritariamente el paro (...) En los Puertos de Bilbao y Pasaia el paro ha sido mayoritario y sólo han funcionado los servicios esenciales (...) en la Construcción, la huelga ha afectado a las obras importantes, con un gran impacto en Gipuzkoa, y desigual, pero significativo en Bizkaia, Araba y Nafarroa (...) las empresas cementeras y las productoras y distribuidoras de hormigón han parado mayoritariamente (Lemona Industrial, Financiera y Minera de Añorga y Arrigorriaga, Portland Valderrivas, Hormigones Lazkano, Caleras de Altzo, Hormigones Azkune...)"

Las informaciones de los sindicatos señalan el fuerte seguimiento del paro en el sector de la enseñanza, especialmente la pública (65%) e ikastolas (casi 100%) y en el sector servicios, con el cierre completo de Carrefour Olaberria, Carrefour Oiartzun, Alcampo y muchos Eroski y un paro generalizado de la limpieza viaria y de edificios y locales.

Además, la huelga ha sido un éxito si tenemos en cuenta la tremenda represión que se vive en las empresas, especialmente en aquellos sectores como el comercio o la

hostelería donde los derechos de los trabajadores quedan absolutamente pisoteados por las amenazas continuas de despido. La dirección de ETB incumplió los servicios mínimos, boicoteando una huelga mayoritariamente secundada y que en otros medios audiovisuales rozó el paro total. Por no hablar de la campaña del gobierno vasco, criminalizando la huelga y a los sindicatos convocantes y poniendo unos servicios mínimos que en la práctica reducían a cero el derecho a huelga en algunos sectores como la sanidad.

Igual que ocurriera en las anteriores convocatorias por parte de la mayoría sindical vasca, las manifestaciones han sido masivas, incluso mayores. Es curioso que la prensa no diga nada de cuánta gente participó, dando sólo el dato de los sindicatos de la manifestación de Iruña (Pamplona), en la que participaron más de 15.000 personas, la más grande hasta ahora. La manifestación de Vitoria-Gasteiz no se quedó atrás. La Plaza de la Virgen Blanca se llenó, sin que pudieran entrar los miles de personas que venían de la calle Dato, algo que no pasó en las anteriores huelgas. Igualmente, las decenas de miles de personas que llenaban las calles de Bilbo confirmaban que la jornada era un éxito. Cabe resaltar, por su importancia política, la presencia de miles de jóvenes, tanto trabajadores como estudiantes. Es evidente el gran descontento que existe entre la juventud a las medidas antisociales, como también es evidente que en el próximo período tendrán un papel protagonista en las luchas.

La división sindical

El principal escollo con el que se ha topado esta huelga ha sido la división sindical. La actitud de las direcciones de CCOO y UGT en Euskal Herria ha sido vergonzosa, acusando de "nacionalista" la huelga justamente

Balance de la huelga general en Galicia

Yaquín García Sinde
Sector Crítico CCOO · Ferrol

El 27 de enero hubo en Galicia una convocatoria de huelga general por parte de la CIG, que se dio en un contexto político muy especial, en plena ofensiva del gobierno y mientras los dirigentes de CCOO y UGT daban señales cada vez más claras de su intención de retomar la senda del mal menor y pactar retrocesos, como así ocurrió. En contraste, el 27-E era un referente de lucha, una apelación a la movilización. Era una acción en la dirección correcta para defender los intereses de los trabajadores y, por lo tanto, los marxistas la apoyamos totalmente.

La convocatoria se enfrentó a varias dificultades, empezando por la actitud desmovilizadora de las direcciones de CCOO y UGT (que en Navantia-Ferrol incluso llevó a la formación de un contrapiquete el día 27) y siguiendo por el hecho de ser una convocatoria autonómica ante un problema estatal; la mayoría de los trabajadores gallegos, incluyendo la base de la CIG, deseaban y esperaban la convocatoria de una huelga general estatal, ya que era la mejor manera de responder a la reforma de las pensiones y al resto de los ataques previstos. Otros factores en contra fueron que convocaba un solo sindicato de los tres que hay en Galicia (con unas fuerzas más o menos equivalentes) y un boicot informativo

descarado tanto dentro como fuera de Galicia; había una clara intención de que la huelga no se conociese en el resto del Estado, ya que contradecía el "gran pacto" que el gobierno, la burguesía y los dirigentes reformistas de CCOO y UGT estaban cocinando.

Amplia participación del sector industrial y en las manifestaciones

En estas circunstancias, era obvio que la convocatoria incidiría fundamentalmente en los sectores más combativos del movimiento obrero (concentrados en las comarcas de Vigo y Ferrol). Era previsible que el panorama urbano del 27 de enero fuese el de un día normal, con el comercio, los bancos, los supermercados, etc., abiertos, como así fue. De hecho, los piquetes de la CIG, conscientes de las circunstancias y sometidos además a un rígido marcaje policial desde la noche del 26, no intentaron forzar el cierre de estos establecimientos.

Pero en la industria el panorama fue muy distinto. Respecto al sector naval, en Vigo se sumó en masa a la huelga, mientras que en Ferrol el paro fue casi total en Navantia-Fene y de un 40% de media en Navantia-Ferrol (30% en la empresa principal y 55-60% en las compañías auxiliares). En empresas u obras importantes también se notó la huelga: Zara Logística en Arteixo, la planta de Alcoa en A Mariña lucense, ENCE de Pontevedra, las orensanas Faurecia y Roberto Verino, las obras del aero-

puerto vigués, de la nueva terminal del aeropuerto de Santiago y del puerto exterior de A Coruña; la recogida de basura y el transporte urbano en diversas localidades, etc. En cuanto al área pública, la huelga tuvo cierta incidencia en la administración y baja en la sanidad y la enseñanza. Las aulas se vaciaron de estudiantes fruto de la convocatoria, entre otras organizaciones, del Sindicato de Estudiantes.

En cualquier caso, el hecho de que muchas empresas funcionasen con relativa normalidad no significa que nadie en las mismas secundase la huelga, sino que los huelguistas eran minoría. Sin este hecho, las manifestaciones (que fueron por la mañana) no hubiesen podido contar con la importante asistencia que tuvieron. Las de Vigo (25.000 manifestantes), Coruña (7.000) y Ferrol (4.000) fueron las más numerosas.

Además, en diversas localidades hubo participación de afiliados de CCOO y UGT, como fue el caso de Ferrol, donde los marxistas de EL MILITANTE desarrollamos una intensa labor a favor de la huelga y participamos tanto en el piquete como en la manifestación. En ello también influyó un factor de última hora: el preacuerdo sobre la reforma de las pensiones alcanzado por las direcciones de CCOO y UGT con el gobierno y la patronal la misma madrugada del día 27. De hecho, en la manifestación se pudo ver a afiliados de CCOO que en la asamblea de la sección sindical de Navantia-Ferrol, celebrada el 21, no habían votado a favor de la huelga y también a afiliados de UGT.

En definitiva, el 27-E, pese a no ser una huelga general propiamente dicha, sí fue una jornada que movilizó a los sectores avanzados de la clase obrera industrial, hecho que tiene una gran relevancia política porque constituyen los cimientos del movimiento obrero organizado y son los que marcan el futuro de la lucha sindical y política. Los trabajadores que secundaron la huelga no lo hicieron tanto por creer que iba a servir para frenar la reforma de pensiones, como para demostrar su voluntad de lucha frente a los ataques que sufrimos.

Deficiencias en la campaña

Pero el día 27 podía haber tenido un resultado todavía mejor si la campaña de la CIG no hubiese adolecido de algunas deficiencias. La CIG anunció la huelga en su web el 29 de diciembre, pero esto no se tradujo en el inicio de una actividad preparatoria en las empresas. De hecho, no se volvió a saber nada de la huelga hasta mediados de enero, perdiéndose así un tiempo muy valioso. Esto fue debido a que los máximos dirigentes de la CIG confiaban en que habría una convocatoria de huelga general estatal en enero y se pusieron a esperar la decisión de las direcciones de UGT y CCOO, que se reunían los días 10 y 11 de enero. Pero Toxo y Méndez no sólo no convocaron, sino que se metieron de cabeza en un pacto social impresentable.

Ese compás de espera significó que la CIG tuvo quince días para hacer su campaña, lo cual influyó negativamente en el ánimo

vuelve a ser un éxito

con declaraciones que transmitían un nacionalismo español repugnante. Igual de grave es que los dirigentes de CCOO y UGT se hayan comprometido en el mes de enero en una farsa de negociación con el gobierno y la patronal, que han conseguido implicar a los dirigentes sindicales en un pacto social que va más allá de las pensiones y que pretende reformar la negociación colectiva. Como claramente admite un artículo del diario *El País*, el 28 de enero: “El objetivo declarado de la siguiente gran reforma del mercado laboral español, la de la negociación colectiva, es incentivar la flexibilidad interna. En román paladino, facilitar que las empresas recurran a cambios de jornada, horarios o salarios antes que al despido para adaptarse a las crisis. Los sindicatos están de acuerdo. Pero a cambio exigen más participación e información cuando una empresa se vea abocada a tomar estas decisiones. Y ese es uno de los puntos que esboza el acuerdo al que CEOE y sindicatos han llegado estos días, en las conversaciones que han mantenido en paralelo a las negociaciones sobre la reforma de pensiones”. O sea, que los sindicatos se conforman con que los empresarios les informen de que han decidido atacar a los trabajadores. Y todo esto la madrugada antes de que salieran los datos de paro, que supera el 20% con más de 4.700.000 desempleados.

Es evidente que esta actitud puede llevar a un sector de la clase obrera a desmotivarse y desmovilizarse pero también a otro sector a indignarse todavía más. De hecho, en la huelga del 27 de enero en Euskal Herria participaron de nuevo delegados y afiliados de CCOO y UGT que son muy críticos con lo que sus direcciones están haciendo. Este dato vuelve a demostrar cómo fue un error que ELA y LAB no convocaran el 29 de septiembre, porque de haberlo hecho hubieran tenido mucha más autori-

dad en la base de CCOO y UGT para pedirles su participación en la huelga del 27.

La unidad sindical en la lucha es fundamental para plantar cara a todos los ataques que nos van a lanzar de aquí en adelante. Qué duda cabe que con unas direcciones como las de CCOO y UGT firmando barbaridades se puede hacer difícil pensar en la unidad, pero eso no debe ser un obstáculo, sino todo lo contrario, a un llamamiento enérgico y fraternal a las bases de CCOO y UGT para que se opongan a lo firmado por sus dirigentes y a que participen en futuras movilizaciones.

Es necesario seguir luchando

La huelga del 27 de enero no puede ser la única contra la reforma de las pensiones. Es necesario continuar con la lucha, necesitamos un plan de movilizaciones y huelgas que vayan a más; que debe ser discutido y votado en asambleas generales en cada centro de trabajo, haciendo un llamamiento específico a las bases de CCOO y UGT a que se sumen a la movilización. Eso presionaría de forma importante a sus direcciones, las cuales no van a tener fácil convencer a sus afiliados de lo que han hecho. Es más, la lucha en Euskal Herria se podría convertir en ejemplo para el resto del Estado. Hemos visto como una revolución en un pequeño país árabe, Túnez, ha encendido la mecha de la revolución en el país árabe más grande, Egipto, y amenaza con extenderse por todo el mundo árabe. Una lucha contundente en Euskal Herria que arrastrara a sectores de las bases militantes y simpatizantes de CCOO y UGT podría tener un efecto contagio a otras zonas, haciéndoles a las direcciones de CCOO y UGT muy difícil seguir firmando acuerdos con la patronal y el gobierno.

**¡No al pacto social!
¡Viva la lucha de la clase obrera!**



de una parte de sus dirigentes. Se percibía claramente que algunos creían que la convocatoria iba a fracasar y que afrontaban la preparación de la huelga con cierta desmoralización y de forma rutinaria. Pero este factor negativo fue compensado por el hecho de que la base militante de la CIG y sus sectores más a la izquierda estuvieron a la altura. Entre las capas avanzadas de la clase obrera gallega, el 27 de enero primó el deseo de luchar, de no resignarse, de dar una respuesta a toda la situación que vivimos. En la medida que ese ánimo combativo salió reforzado, el balance de la huelga es positivo.

Continuar la movilización

El 27-E debe contribuir ahora a impulsar la lucha contra los recortes, aunque lamentablemente tengan el aval del sindicalismo reformista de las direcciones de CCOO y UGT. La CIG ya anunció movilizaciones contra el pacto de pensiones. La mejor forma de prepararlas es organizar asambleas en las principales empresas de Galicia para que los trabajadores se pronuncien sobre el acuerdo alcanzado. El interés de la clase obrera

exige ahora crear un movimiento desde abajo en contra del acuerdo de pensiones y para obligar a las direcciones de CCOO y UGT a romper el pacto y convocar una huelga general estatal, como primer paso de una movilización ascendente en defensa de los intereses de los trabajadores. Los dirigentes de la CIG tienen una responsabilidad en esto, y para ello es fundamental que mantengan una actitud no sectaria hacia las bases de CCOO y UGT, donde como ya estamos viendo hay mucha gente en contra de lo que firmaron Toxo y Méndez. En situaciones como esta sería un error que el árbol de los intereses a corto plazo de la propia organización impidiese ver el bosque de los intereses del movimiento obrero. Más que nunca hace falta tener una perspectiva general, fomentar la máxima unidad de clase y defender un sindicalismo combativo y que también ofrezca una alternativa política para superar el sistema capitalista. Tanto en la base de la CIG como en las de CCOO y UGT hay cada vez más trabajadores que sienten esta necesidad, una necesidad que sólo las ideas del marxismo pueden satisfacer.

Primeros rechazos dentro de CCOO a la firma del “pacto de Estado”

Publicamos a continuación algunas de las primeras reacciones de rechazo al pacto alcanzado entre gobierno, dirigentes de CCOO y UGT y CEOE. Sigue en www.elmilitante.net toda la información actualizada.

Extracto del cartel distribuido, el 31 de enero de 2011, por el Sector Crítico de CCOO en Navantia – Ferrol

“El acuerdo alcanzado por los dirigentes de CCOO y UGT con el gobierno y la patronal (...) provocará un importante recorte en las pensiones futuras y, por tanto, representa un retroceso grave en los derechos de los trabajadores. (...) El objetivo del recorte de las pensiones públicas es obligar a quien quiera tener una pensión digna (y pueda pagarla) a suscribir fondos privados (...) increíblemente, toda la información de la que disponemos los trabajadores procede de los medios de comunicación. En la era de internet es inaceptable que, como mínimo, el texto del acuerdo no esté colgado en las webs oficiales de CCOO o UGT, a disposición de cualquier trabajador.

(...) Hoy somos muchos los afiliados de CCOO que nos sentimos engañados por los dirigentes de nuestro sindicato.

(...) El consejo confederal de CCOO no puede decidir la firma de la reforma de las pensiones sin que los afiliados y los trabajadores tengan la posibilidad de expresar su opinión. ¡Son las pensiones de todos, no las suyas! ¡Tenemos derecho a opinar! ¡No sigamos callados, no sigamos pasivos! La voz de la base tiene que llegar a la cúpula de nuestro sindicato. Por eso, los miembros de la ejecutiva elegidos por el Sector Crítico le planteamos al secretario general la necesidad de convocar una asamblea urgente de la sección sindical para hoy, quien rechazó la propuesta (...) todo parece indicar que la información se transmitirá después de dicha firma. Para dar a conocer el contenido de esta reforma y debatir qué podemos hacer (...) el sector crítico convoca una reunión (...).”

Extracto del comunicado de la sección sindical de CCOO de SDS - Bahía de Cádiz

“El acuerdo alcanzado por los dirigentes de CCOO y UGT con el gobierno y la patronal (...) provocará un importante recorte en las pensiones futuras (...) Los delegados de CCOO en SDS estamos movilizándonos para que la democracia obrera sea la que tome las decisiones en el sindicato y que los derechos de los trabajadores sean el único objetivo de nuestra organización. Desde la sección sindical de CCOO

en SDS creemos que para defender un modelo de sindicalismo distinto del que siguen actualmente las cúpulas sindicales es necesaria la participación de todos los trabajadores. Por eso te invitamos a afiliarte a CCOO e implicarte con nosotros en la defensa de un sindicalismo combativo, democrático y de clase, que nos permita combatir las contrarreformas y luchar por los derechos de todos los trabajadores”.

Oposición al acuerdo de la sección sindical de CCOO en Pull&Bear Logística (Ferrol)

La sección sindical de CCOO en Pull&Bear Logística manifestó en un comunicado su rechazo al acuerdo de las pensiones, porque “representa un ataque grave a los derechos de los trabajadores”. Con el objeto de explicar su postura sobre el sistema

de pensiones la sección sindical de CCOO en Pull&Bear convocó reuniones en el centro de trabajo. “Si lo que ya se conoce de la reforma de las pensiones es suficientemente grave, cabe preguntarse si todavía no nos aguarda alguna sorpresa más”.

Los secretarios comarcales de CCOO de Pontevedra y Vilagarcía de Arousa rechazan el acuerdo

Según el *Diario de Pontevedra*, de 31 de enero de 2011, las comisiones ejecutivas de las uniones comarcales de Comisiones Obreras en Pontevedra y en Vilagarcía de Arousa han manifestado su “desacuerdo”

con los términos del pacto. Se trata de un documento “desequilibrado” en el que “priman más los recortes que los nuevos derechos” y que “no reúne las condiciones mínimas para ser aceptado”.

No en nuestro nombre. Afiliados a CCOO de la Administración de Justicia (Salvador Muerza y 43 firmas más)

“Los firmantes, afiliados a CCOO en el sector de la Administración de Justicia, no podemos callar ni transigir ante la concertación por los dirigentes del sindicato de un pacto para la reforma del sistema público de pensiones que (...) va a cercenar con alevosía conquistas sociales tan arraigadas y básicas como el establecimiento de la edad de jubilación a los 65 años con derecho a percibir la pensión íntegra si se han completado 35 de cotización. Avances sociales fruto de las luchas y afanes de las generaciones que nos precedieron y cuya consecución tantos esfuerzos y sacrificios exigió están siendo abolidas con la intolerable complicidad de la cúpula dirigente del sindicato. (...) Nos hallamos ante la más cruel aplicación de la receta del señor Díaz Ferrán: trabajar más (años) para cobrar menos (pensión).

Por supuesto que no se ha consultado a la afiliación para pergeñar tan infamante pacto sabedores de que el rechazo hubiera sido frontal y rotundo: ningún trabajador, mal que les pese a nuestros dirigentes, está por avalar medidas regresivas que les perjudican de manera tan grave. Quienes se presten a rubricarlo no lo harán atendiendo la voluntad de los trabajadores que dicen representar sino mucho recelamos estarán sometidos a las brutales exigencias de aquellos que, siendo los causantes de la crisis, y contando con el beneplácito de unos poderes públicos postrados a sus designios e intereses están empecinados en la destrucción de los sistemas de protección social que todavía subsisten en nuestro país”. (Publicado en www.noticiasdenavarra.com/2011/02/02/opinion/carrtas-al-director/no-en-nuestro-nombre)

Ver también: “Asamblea de CCOO de Asturias del 12 de enero: los delegados exigen movilizaciones” (aunque celebrada antes de la firma del acuerdo, esta crónica refleja con claridad el malestar existente en CCOO)

Contrarreforma de las pensiones: Las direcciones de CCOO y UGT avalan los ataques del gobierno y la patronal

Organizar la izquierda de CCOO y UGT en defensa de un sindicalismo combativo, de clase y democrático

Editorial

Cuando el pasado 29 de septiembre millones de trabajadores secundaron la huelga general contra la contrarreforma laboral y llenaron las calles de todo el Estado en una gran demostración de fuerza, la voluntad de dar continuidad al combate iniciado para frenar los ataques del gobierno —y rechazar su sumisión a los dictados de la gran banca, la patronal y los especuladores mundiales— se convirtió en un clamor. A pesar de que las condiciones para continuar las movilizaciones —aumentando la intensidad y dureza de las mismas— eran completamente favorables, los líderes de los grandes sindicatos decidieron erróneamente cortar el proceso echando jarros de agua fría. Por un lado, se sacaron de la manga una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que el parlamento volviese a debatir sobre una contrarreforma del mercado laboral que había aprobado por una gran mayoría. Si esta estrategia equivalía a un abandono de la movilización, las manifestaciones convocadas el 15 y 18 de diciembre, cuando ya eran públicas las intenciones de Rodríguez Zapatero de acelerar la contrarreforma de las pensiones y aumentar la edad de jubilación a los 67 años, se presentaban claramente insuficientes para derrotar el desafío planteado. No obstante, en la manifestación celebrada en Madrid, el secretario general de CCOO afirmó que la extensión de la jubilación a los 67 años superaría una línea roja que llevaría a la organización de una nueva huelga general en el mes de enero. Muchos trabajadores y delegados sindicales creyeron en sus palabras y se preparaban para esta perspectiva.

En cuestión de días, y tras varias reuniones con el presidente del gobierno, Cándido Méndez y Fernández Toxo empezaron a realizar manifestaciones a favor de un pacto global. Aterrorizados de tener que encabezar una escalada de movilizaciones que condujera a un escenario de luchas semejante al de Francia o Grecia; temerosos de perder la gracia y el apoyo del Estado capitalista y el maná de las subvenciones del que vive el aparato sindical; y pensando que así contribuían a paliar el batacazo que puede cosechar el PSOE en las próximas elecciones del 22 de mayo, se inclinaron de nuevo ante la lógica impuesta por los capitalistas, asumieron su papel de “hombres de Estado” y firmaron el llamado “Acuerdo Social y Económico” junto al presidente de la CEOE, Juan Rosell y el del gobierno, Rodríguez Zapatero. Los dirigentes de



CCOO y UGT otorgaban de esta manera un escandaloso aval para que llevara a cabo uno de los mayores ataques contra los derechos de los trabajadores de las últimas décadas.

Las consecuencias de la contrarreforma de las pensiones y el pacto social

Las líneas maestras del acuerdo son las siguientes:

1) Se aumenta la edad legal de jubilación de los 65 a los 67; se extienden los años cotizados para poder jubilarse a los 65 años, de 35 a 38,5, y de los años cotizados para tener derecho a cobrar íntegramente la pensión, de los actuales 35 a 37 años. Las direcciones sindicales aceptan que se incremente el cómputo de años para calcular la pensión, que pasan de 15 a 25 años. Esta última medida supone un recorte de la cuantía de la pensión en torno a un 10-20%. La reforma se empezará a aplicar gradualmente a partir de enero de 2013 y estará plenamente vigente en 2027. A partir de esa fecha, cada cinco años se revisará el sistema de pensiones (edad, periodo de cómputo y años cotizados) de forma automática, abriendo así la puerta a más recortes en el futuro.

2) El acuerdo también plantea la bonificación del 100% del pago a la seguridad social por un año para aquellos empresarios que contraten parados menores de 30 años. Una propuesta que regala mano de obra barata a la patronal, a cargo de los recursos públicos y que no creará empleo digno ni estable.

3) Sindicatos y patronal se dan de plazo hasta el 19 de marzo para llegar a un acuerdo en materia de negociación colectiva. Las intenciones de la CEOE y del gobierno son claras: acabar con los convenios sectoriales y aplicar masivamente las cláusulas de descuelgue y, sin embargo, el secretario general de CCOO en la rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo señaló que “soy de los convencidos de que en la negociación colectiva hay más potencial para mejorar la competitividad de la economía española que en cualquier reforma laboral”.

Las consecuencias de esta contrarreforma en el sistema de pensiones serán muy duras. En primer lugar supondrá la generalización de la penuria económica entre la población de más edad: los pensionistas que en el Estado español están en riesgo de pobreza llegan ya al 19%, y el 77% de los que perciben una pensión no alcanzan los 1.000 euros. Todos los trabajadores nacidos a partir de 1962 verán reducida la cuantía de sus futuras pensiones y tendrán que ampliar forzadamente su vida laboral si quieren recibir una pensión un poco mayor. Atendiendo a estas cifras es evidente que detrás de la contrarreforma hay una estrategia de fondo: potenciar los fondos privados de pensiones. Con su firma estampada en este acuerdo, CCOO y UGT están reforzando el poder del sector financiero que quiere copar el sistema de pensiones y hacer de él un lucrativo negocio.

PASA A LA PÁGINA 2

Únete a la corriente marxista agrupada en el periódico obrero EL MILITANTE y lucha con nosotros por una alternativa socialista:

- Reducción de la jornada laboral a 35 horas sin reducción salarial. Contra el desempleo: reparto del trabajo.
- Jubilación a los 60 años con el 100% del salario con contratos de relevo, manteniendo la estabilidad en el empleo.
- No a la precariedad laboral. Fijo a los quince días. Por trabajo periódico, contratos de fijos discontinuos.
- Salario Mínimo de 1.100 euros al mes a partir de los 16 años.
- No a la reforma laboral.
- Defensa de la empresa pública. No a las privatizaciones. Planes de inversión y renovación tecnológica que garanticen todos los puestos de trabajo.
- No a la discriminación de la mujer trabajadora. A igual trabajo, igual salario.
- Defensa de la sanidad pública. No a la privatización.
- Por una red educativa pública, única, laica, gratuita, científica y de calidad. 7% del PIB para la educación pública.
- No a los recortes en el subsidio de desempleo.
- Un puesto de trabajo o subsidio de desempleo indefinido igual al SMI hasta encontrar trabajo.
- Vivienda digna. Nacionalización de las grandes empresas constructoras y municipalización del suelo urbano para acometer la construcción de un millón de viviendas sociales en los próximos cuatro años.
- Ninguna restricción en nuestros derechos de expresión, reunión y huelga. No a la Ley de Partidos.
- Por el derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas. Por una Federación Socialista de Nacionalidades Ibéricas.
- Depuración de los elementos reaccionarios del aparato del Estado. Control por parte de los sindicatos obreros de las academias militares y de policía.
- Ninguna discriminación en el empleo por edad, sexo o nacionalidad. Derogación de la Ley de Extranjería. Plenos derechos laborales y ciudadanos para los inmigrantes.
- Expropiación de las empresas que se declaren en quiebra o en suspensión de pagos, bajo control obrero.
- Nacionalización de la banca, la tierra y los monopolios sin indemnización, salvo en casos de necesidad comprobada, y bajo control obrero. De esta forma se podría planificar democráticamente la economía en beneficio de la mayoría de la sociedad.

SUSCRÍBETE

Estado español	Normal	Ayuda	Resto del mundo	Normal	Ayuda
<input type="checkbox"/> 6 números	12 €	23 €	<input type="checkbox"/> 6 números	23 €	35 €
<input type="checkbox"/> 12 números	23 €	35 €	<input type="checkbox"/> 12 números	35 €	47 €

Nombre _____
 Calle _____
 Localidad _____
 Provincia _____ CP _____
 Teléfono _____ E-mail _____

Giro Postal al Apartado de Correos 5.200, 28080 Madrid Ingreso a nombre de la A.C. Debate Social, c/c: 0182 - 0975 - 51 - 0201540722 del BBVA.

CONTACTA CON NOSOTROS

ANDALUCÍA	
• Cádiz	651 812 328
• Granada	660 149 846
• Málaga	952 276 563
• Sevilla	954 222 261
ARAGÓN	
• Zaragoza	697 338 376
ASTURIAS	985 550 933
CASTILLA-LA MANCHA	
• Guadalajara	949 201 025
• Puertollano	650 837 265
• Toledo	699 956 847
CASTILLA Y LEÓN	
• Salamanca	653 699 755
CATALUNYA	
• Barcelona	933 298 921
• Girona	657 212 367
• Tarragona	660 721 075
EUSKAL HERRIA	
• Álava	945 231 202
• Guipúzcoa	625 707 798
• Pamplona	635 919 738
• Vizcaya	944 790 381
GALICIA	
• Compostela	679 500 266
• Coruña	600 810 516
• Ferrol	626 746 950
• Vigo	636 217 248
MADRID	914 280 248
MURCIA	664 391 225
MALLORCA	669 262 800
PAÍS VALENCIA	961 339 120

www.elmilitante.net — elmilitante@elmilitante.net